

Julio 15 de 1938

23ª REUNION — 14ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor Juan G. Kaiser e ingeniero Juan F. Morrogh Bernard

MINISTROS PRESENTES:

del Interior,
Doctor Diógenes Taboada
de Guerra,
General de brigada Carlos D.
Márquez

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguirre Cámara, José
Aisina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperín, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Biancofiore, Rafael
Boatti, Ernesto C.
Boero, Albino
Busignani, Mario
Cabral, Humberto
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis E.
Cappellini, Luis E.
Carús, Agustín J.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Castro Friedani, Manuel L.
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courel, Carlos D.
Damonte Taborda, Raúl

Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eberlé, Enrique
Espil, Alberto
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos
Garona, Juan A.
Godoy, Raúl
Gómez Grandoll, Clemente
Güerci, José María
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Victor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Hernández, Victorio
Horne, Bernardino
Illanes, Eloy J.
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Izurieta Fourquet, Agustín
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Molano
López García, Francisco
López, Héctor M.
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos F.
Morrogh Bernard, Juan F.
Mugica, Adolfo
Muniagurria, Walter Julio
Noel, Carlos M

Noel, Martín
Onsari, Fabián
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osorio Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pizarro, Néstor A.
Quintana, Fenelón
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Saccone, Romeo D.
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solís, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Telsaire, Eduardo (h.)
Urien, Enrique César
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Vilgré La Madrid, Juan

Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Agulla, Juan Carlos
Arbeletche, Aníbal P.
Arias Uriburu, Juan
Busaniche, Julio A.
Devoto Acosta, Alcibíades
Duffy, Eduardo N.
Fazio Rojas, Lorenzo
Ferreira, Antenor E.
Ghioldi, Américo
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Guerrero, José Rafael
Mihura, Enrique F.
Moreno, Ricardo A.
O'Reilly, Guillermo R.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Pita, Carlos A.
Radio, Pedro
Rodríguez, Alfredo
Sáenz, Mario
Simón Padrós, J.

AUSENTES, CON AVISO:

De Miguel, Benito
Vásquez, Juan Carlos

AUSENTES, SIN AVISO:

Aguiar, Henoch D.
Barriouuevo, Gerardo
Critto, Miguel
Figueroa, Julio A.
Infante, Faustino
Martínez, Manuel
Prat Gay, Fernando de

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Orden de la labor.
- 4.—Moción del señor diputado Lazo, sobre trámite de los asuntos entrados. Es aprobada.

5.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones oficiales.
- II.—Despachos de comisión.
- III.—Peticiónes particulares.
- IV.—El señor diputado Basualdo reproduce un proyecto de ley, por el que se acuerda

pensión a la señora **Esther Castañeda Lynch de Gainza**.

V.—Proyecto de ley del señor diputado **Güerci**, sobre subsidio a la **Sociedad de Bomberos Voluntarios**, de **General José F. Uriburu**.

VI.—El señor diputado **Illanes** reproduce un proyecto de ley, sobre creación de una estación zootécnica en el departamento de **Ischilín** (Córdoba).

VII.—Proyecto de ley del señor diputado **Anastasi**, sobre permuta de terrenos para el emplazamiento del **Hospital Cosme Argerich**, en la Capital Federal.

6.—Orden de la labor.

7.—Continúa la consideración del despacho de la **Comisión de Guerra y Marina**, en el proyecto de ley sobre gendarmería nacional.

—En Buenos Aires, a quince días del mes de julio del año 1938, siendo la hora 15 y 59:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Quintana. — Pido la palabra.

Como está por vencer la hora reglamentaria y advierto que faltan pocos señores diputados para formar quórum, hago indicación de que se continúe llamando unos minutos más.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Como hay asentimiento, así se hará.

2

ACTA

—A la hora 16 y 3:

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con la asistencia de 88 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado **Ortiz Basualdo** se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

3

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Schoo Lastra. — Pido la palabra.

Ayer los señores ministros de Guerra y del Interior estuvieron en la Cámara esperando varias horas que ella entrara a considerar el asunto que había resuelto tratar en el día: el despacho relativo a gendarmería nacional. He oído decir y desearía que la Presidencia lo confirmara, que los señores ministros se encuentran en la casa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Efectivamente, están en el despacho de la Presidencia.

Sr. Schoo Lastra. — Rogaría a mis colegas que tengan en cuenta esa circunstancia, para que no se repita lo de ayer, en que recién a las 19 horas se entró a la orden del día.

4

MOCION

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

Complementando las manifestaciones del señor diputado por Buenos Aires, pediría que se autorizara a la Presidencia a girar los asuntos entrados a las respectivas comisiones y que entremos inmediatamente a tratar la orden del día, invitándose a pasar al recinto a los señores ministros.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar, en primer término, la moción de girar los asuntos entrados a las comisiones respectivas.

—Resulta afirmativa.

5

ASUNTOS ENTRADOS

I

Comunicaciones oficiales

La Comisión de Fomento de Romang (Santa Fe) solicita la sanción del proyecto de ley relacionado con la pavimentación del camino de San Justo a Resistencia (Chaco). (*A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.*)

II

Despachos de comisión

HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL:

En el proyecto de ley del señor diputado **Cafferata**, sobre modificación del artículo 4º de la ley número 12.294,

Sr. Osorio. — Pido rectificación.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a rectificar.

— Resulta nuevamente afirmativa de 57 votos, votando 107 señores diputados.

7

GENDARMERIA NACIONAL

— Ocupan sus asientos los señores ministros del Interior, doctor Diógenes Taboada, y de Guerra, general de brigada don Carlos D. Márquez.

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la discusión del proyecto sobre creación de la gendarmería nacional.

Sr. Ministro del Interior. — Pido la palabra.

Al ocupar esta banca, señor presidente, como secretario de Estado en el Departamento del Interior, para ponerme en contacto con los representantes directos e inmediatos de la soberanía popular, viene a mi recuerdo, con verdadera complacencia, la época en que tuve el honor de pertenecer a esta Cámara, representando a mi provincia natal. Con el mismo concepto de responsabilidad al servicio de las instituciones con que desempeñé aquel mandato, he aceptado el honroso cargo que me ha confiado el excelentísimo señor presidente de la Nación para colaborar en su gobierno.

Sea esta expresión íntima mi mejor saludo y homenaje para esta Honorable Cámara.

Encargado especialmente de la atención de los asuntos políticos del gobierno, creo deber expresar en la primera oportunidad de presentarme a la Honorable Cámara, y aun cuando sea en términos muy breves, la posición del Poder Ejecutivo en sus relaciones constitucionales con ambas ramas del Congreso; posición ya enunciada por otra parte con amplitud y claridad en discursos y mensajes por el señor presidente de la República. La actitud del Poder Ejecutivo en tal sentido se ha de ajustar cumplidamente a las prescripciones de la Carta Fundamental y no ha de escatimar la concurrencia de sus ministros en el recinto, sea en sus funciones colegislativas, sea en las explicaciones e informes que se le soliciten: facultad de requerimiento, esta última, librada al criterio y discreción de los cuerpos legislativos para ser usada en la medida que impone un régimen político de acentuada tendencia presidencialista.

Respetuoso de las atribuciones constitucionales de los otros poderes, ha de cuidar celo-

samente de las suyas para ejercerlas dentro de la amplitud que le han sido conferidas con la moderación y prudencia que deriva de una sensata y correcta interpretación de los textos legales. Y abriga, por último, la esperanza de realizar, en colaboración y concurrencia con el Congreso, una obra fecunda para los intereses fundamentales del país, que entiende deben estar por encima de todas las otras preocupaciones.

En conocimiento de que se discutía el despacho de la Comisión de Guerra y Marina relativo a la creación de la gendarmería nacional, hemos considerado con mi distinguido colega el señor ministro de Guerra, que era nuestro deber concurrir y colaborar en su sanción. La creación de la gendarmería nacional, destinada especialmente a garantizar el derecho primario y esencial de seguridad para la vida e intereses de los pobladores de los territorios nacionales, es, sin duda y sin hipérbole, una verdadera necesidad pública. La imponen no sólo la cruda realidad que palpamos casi a diario a través de las informaciones oficiales y de la prensa, sino también un hondo y saludable sentido de solidaridad nacional hacia los habitantes de aquellas lejanas regiones del país. Los actuales medios de prevención y vigilancia resultan inadecuados e insuficientes y no se ha de curar el mal de que padecen los territorios en tal sentido, con nuevas organizaciones políticas y administrativas, si faltan los elementos esenciales que aseguren su eficiencia y los benéficos resultados que de esas nuevas organizaciones pudieran esperarse.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º, ingeniero Juan F. Morrogh Bernard.

Hace muy poco tiempo, con motivo de una de las periódicas denuncias de los pobladores del Chaco quejándose de la inseguridad en que vivían por la acción delictuosa de elementos perniciosos e inadaptables, el gobernador del territorio, a requerimiento del ministro del Interior, produjo un amplio informe sobre los hechos denunciados por medio de una nota que publicaron todos los diarios del país, en la que se exponían con claridad y precisión las causas en virtud de las cuales los malhechores operaban en la mayoría de los casos con la convicción de la impunidad.

No es posible que en un territorio compuesto por cerca de 100.000 kilómetros cuadrados, con inmensas regiones boscosas, con poblacio-

nes diseminadas a largas distancias, con extensos caminos solitarios, muchos de ellos abiertos en plena selva, se pueda prestar una buena y bien organizada vigilancia y seguridad con 500 agentes escasamente pagados, mal montados y con precarios y deficientes elementos defensivos. Agréguese a ello que de los 500 agentes del Chaco, cerca de 100 tienen que prestar servicios en la capital del territorio; que los demás deben distribuirse entre los 67 pueblos del Chaco y se llegará a la conclusión de que el servicio patrullero de vigilancia en los caminos es nulo o poco menos.

Características semejantes, y en algunos casos peores, presentan otros territorios, especialmente los de la región Sur, que limitan con el macizo andino. Los servicios de vigilancia y de seguridad policial deben realizarse no sólo teniendo en cuenta la densidad de la población, sino también su extensión y las características topográficas especiales de los lugares donde la policía debe actuar. Los territorios abarcan un área un poco superior a la tercera parte de la extensión total de la República. Mientras las ocho provincias que tienen límites internacionales, cubren una extensión de 3.500 kilómetros de frontera, los territorios exceden los 4.500 kilómetros de frontera internacional. Sus pueblos, diseminados a largas distancias y sus características especiales, con el 50 % de regiones boscosas en los territorios del Norte, aptos para ser refugio y acecho de delincuentes, y con el 80 % de regiones inclementes y llenas de accidentes físicos en los territorios del Sur, imponen, ante el criterio más reactivo, la necesidad impostergable de la creación de este cuerpo de policía militarizada, que tenga una férrea y rígida organización disciplinaria, que cuente con rápidos y abundantes medios de locomoción, que esté perfectamente equipada y bien armada, que tenga unidad de comando, factores todos concurrentes para una buena y bien organizada vigilancia, que no sería posible realizar con la policía de los territorios y con la organización que existe, aun cuando fueran aumentadas sus plazas de agentes.

Es verdad que en lo que se refiere a la seguridad y al amparo de los intereses de los particulares en los territorios nacionales, es una necesidad que se viene dejando sentir desde muchos años atrás, lo que ha motivado otras iniciativas análogas a las que hoy se discuten: pero es indudable, también, que esa necesidad se agudiza día a día con la creación de nuevos pueblos, con el fomento del comercio y con el aumento de la riqueza.

Todos sabemos, desde luego, que no es sólo desde el punto de vista de la seguridad que los territorios se desenvuelven en precarias condiciones, ya que en el aspecto económico y político, en el social, en lo que se refiere a condiciones de trabajo, en el aspecto de la higiene y salud públicas, en el aspecto cultural por la difusión de la enseñanza, no obstante los esfuerzos realizados por administraciones anteriores, están muy lejos de ser satisfechas esas necesidades en la medida que lo imponen los pobladores de los territorios, que, al igual de los demás habitantes del país, contribuyen a la prosperidad y al engrandecimiento nacional.

Debemos convenir, también, que no ha de ser obra de un día, ni siquiera de un período de gobierno, subsanar todos estos males, que el actual Poder Ejecutivo se propone encarar con perseverancia y seriedad, adoptando las medidas administrativas y solicitando las de carácter legislativo que corresponda.

Dentro de esa política de atención y de fomento a los territorios, que ya ha enunciado el señor presidente de la República en su mensaje, el Poder Ejecutivo se ocupa en estos momentos de hacer efectivo el cumplimiento de leyes y de decretos que parece hubieran caído en desuso en algunas regiones. Y puedo anunciar a la Honorable Cámara que dentro de breves días el Poder Ejecutivo presentará a la consideración del Congreso una ley orgánica de reorganización completa, administrativa y política de los territorios nacionales.

Por ahora viene a la discusión de la Honorable Cámara este proyecto de creación de la gendarmería nacional destinada a satisfacer necesidades premiosas. El Poder Ejecutivo desea y pide a la Honorable Cámara quiera sancionar el despacho de la comisión.

Esta gendarmería tendrá el carácter de policía militarizada, sin que tal circunstancia implique que ella formará parte integrante del ejército, pero en su período de reclutamiento y organización dependerá del Ministerio de Guerra. Consultando la mayor eficiencia y el mejor desempeño de sus servicios en su organización interna, esta gendarmería estará sometida al Código de Justicia Militar, porque los lugares lejanos donde debe actuar y la índole de las funciones que debe desempeñar, exigen de este cuerpo policial una rígida y severa organización disciplinaria.

Una razón fundamental sustenta la iniciativa de que esta gendarmería dependa del Ministerio del Interior, lo que, por cierto, no es una novedad en este proyecto, por cuanto dentro de

sus antecedentes nacionales, existe un proyecto del año 1911, del entonces diputado doctor Julio A. Roca, por el cual se creaba un cuerpo de gendarmería policial para los territorios, estableciendo para él una doble dependencia del Ministerio de Guerra y del Ministerio del Interior. Además, ésta es la organización que tiene la policía en otros países, como en Bélgica, como en Francia, en que depende de tres ministerios y como la tuvo en España.

Las funciones permanentes y esenciales de esta gendarmería, serán las de seguridad y vigilancia, de mantenimiento del orden y tranquilidad pública y del amparo y resguardo de los intereses particulares, vale decir, funciones de carácter estrictamente civil, que no es conveniente ni posible que sean desempeñadas por el ejército permanente, creado por la Constitución con otras finalidades y otros destinos.

Si se fuera a crear un cuerpo militarizado en todos sus aspectos y realizaciones, sería lo mismo que formar una división de ejército, lo que traería, como consecuencia, convertir a los territorios nacionales en zonas o colonias militares, desvirtuándose en el hecho su organización política y administrativa y alejándose cada vez más la perspectiva y legítima aspiración de sus pobladores de ver esos territorios, algún día, convertidos en provincias de la Confederación Argentina.

Es natural que, como lo prevé el proyecto, su régimen de organización, la designación de sus jefes y oficiales y su período de organización y de reclutamiento deban depender, y es forzoso que dependan, del Ministerio de Guerra.

Otros aspectos encara también este proyecto en lo que se refiere a la colonización, mediante la subdivisión de parcelas adecuadas para la labor de la tierra. Y también contempla aspectos culturales, ya que establece que contingentes de maestros irán, confundidos con la gendarmería, a llevar los beneficios inapreciables de la instrucción allí donde la obra del Consejo Nacional de Educación no haya podido llegar todavía.

Es claro que no se pueden entonar loas anticipadas ni se pueden hacer mayores ilusiones sobre estos aspectos del proyecto, porque la colonización y la expansión cultural de los territorios debe derivar de planes más orgánicos y de empresas de mayor aliento; pero siempre importará el proyecto una tentativa feliz que es necesario aprovechar en la medida de lo posible. Debe convenirse que es imposible pensar seriamente en el fomento de la colonización, en la creación de la pequeña o de la grande in-

dustria, en el aumento del comercio, en el adelanto efectivo de los territorios, si falta el elemento primordial e indispensable de la seguridad para la vida e intereses de sus habitantes, si faltan, en una palabra, el orden y la tranquilidad.

No se teman, señor presidente, los conflictos que puedan provocarse entre las autoridades por sus facultades jurisdiccionales, porque una prolija y cuidadosa reglamentación hará que ellos se subsanen de inmediato cuando se presenten en la aplicación práctica de la ley. Esa reglamentación ha de crear un procedimiento claro y recto de enlace entre la autoridad meramente civil y la gendarmería, cuya función cooperadora y coadyuvante no tiene para qué ni por qué producir conflictos de jurisdicción.

Persuádase la Honorable Cámara de que si convierte en ley el despacho de la comisión, habrá producido una de las sanciones más necesarias, más justificadas y más eficaces de estos últimos años.

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Solana. — Pido la palabra.

No se requiere ser un avezado parlamentario para percibir que se está en desventaja cuando se sale al encuentro de este debate, después de haber escuchado la palabra elocuente del señor ministro del Interior. Pero debo de hacer uso de la palabra para explicar en el análisis del voto que voy a dar, una situación de orden personal. Es bien sabido que cuando se trata de un asunto que no afecta a la doctrina del partido, los diputados de la Unión Cívica Radical disponemos de absoluta libertad para definir nuestro voto. Es el caso presente. Ello explicará por qué un grupo de diputados de mi sector votará favorablemente el proyecto y por qué otro —quizá sólo el diputado que habla— votará en contra. Este hecho por conocido no necesita de mayores explicaciones.

Pero hay otras circunstancias que me obligan a fundar mi voto. La primera es el antecedente radical de este proyecto, pues él es, incuestionablemente, tal como lo presenta la Comisión de Guerra y Marina, una especie de copia servil del proyecto que en el año 1923 envió a esta Cámara el entonces presidente de la República, doctor Marcelo T. de Alvear.

Sr. Videla Dorna. — No olvide el señor diputado que la comisión se abocó al estudio de una sanción del Senado.

Sr. Solana. — Así es. Y la sanción del Senado y el despacho de la comisión siguen sien-

do una copia servil del proyecto enviado el año 1923 por el entonces presidente doctor Alvear.

Sr. Schoo Lastra. — No me parece muy parlamentario el término «servil».

Sr. Solana. — Tal vez no sea el vocablo muy feliz; quizá sea más adecuado decir «copia fiel». En cualquier forma, más que el vocablo, interesa la intención con que se pronuncia.

Sr. Schoo Lastra. — Me parece más propio el vocablo.

Sr. Solana. — El señor ministro se refirió a algunos antecedentes relacionados con este proyecto de gendarmería, a los cuales yo tendría que agregar diversas iniciativas de hombres de mi propio partido. Señalo el hecho para decir que esa especie de antecedentes familiares del proyecto de ley en discusión, son los que me han obligado a meditar el voto que voy a dar.

Hay, también, una segunda circunstancia que me obliga a fundar mi voto, y es el hecho de que el despacho traiga la firma de la casi totalidad de los diputados de mi sector, miembros de la comisión, y la circunstancia particular de haber sido informado por el diputado Susan, hombre con el cual guardo una absoluta solidaridad.

Y hay una última razón que me obliga a explicar mi voto. Voy a votar contra algo que el señor ministro ha definido como una organización militarizada, ya que si bien no forma parte integrante del ejército, estará sometida a su régimen y disciplina. Quieras que no, será una organización militarizada. Contra todo eso voy a votar.

Por esa razón no deseo que mi voto en contra sea interpretado con sentido equivoco, ya que me es satisfactorio decir que me vinculan al ejército de mi país el recuerdo de las mejores horas de mi vida. En sus filas he hecho mi carrera profesional. Y para no entrar en el terreno de las autobiografías intrascendentes, entro de lleno a la cuestión.

Es indudable que cuando se tiene frente a sí un proyecto de ley tan importante como éste, como que dispone la creación de un organismo compuesto por 3.000 gendarmes y 698 jefes, desde el jefe superior hasta los subayudantes, organismo que va a costar 11.000.000 de pesos al año, prescindiendo de los 4.000.000 para su constitución, es indispensable estudiar, antes que las causas extrínsecas que le puedan haber dado origen, y aun antes del estudio del proyecto mismo, es necesario estudiar todos sus antecedentes. Yo no los he de enumerar,

porque la organizada exposición que hizo ayer el miembro informante, señor diputado Susan, me exime de ello.

Pero hay un hecho importante.

Al estudio ordenado de aquellos antecedentes teóricos que hizo ayer el señor miembro informante, hay que agregar dos antecedentes de hecho, que existen en el país. No les recordaré con la fruición del polemista que exhibe un argumento a su favor, sino con pena, porque afectan dos cosas que me son muy caras: afectan a algunos miembros del ejército y a un gobierno surgido de las filas de mi partido.

El 10 de noviembre de 1921 se resolvió, por decreto, la creación de diez cuerpos de gendarmería. Sus fundamentos son los de siempre: razones de urgencia, reclamaciones de los pobladores, despreocupación del Parlamento para resolver el problema por ley.

El artículo 1º de ese decreto, establece: Créanse diez cuerpos de gendarmería con el siguiente personal, que deberá prestar servicios en cada uno de los territorios nacionales, etcétera. Estarán compuestos de un capitán jefe, tantos tenientes, tantos subtenientes. Por el artículo 2º se destinan \$ 4.500, etcétera.

A los pocos días se hicieron las designaciones. Tengo copias de los decretos correspondientes. Para el destacamento de gendarmería de Santa Cruz, figura como jefe un capitán retirado del ejército; para el del Chaco se nombra jefe a un capitán retirado del ejército; como teniente a un teniente 1º retirado, como subtenientes, a tres sargentos primeros retirados. En el destacamento Misiones se nombra como jefe a un capitán retirado; en la gobernación de Río Negro se nombra como subteniente de la gendarmería a un subteniente retirado, como jefe inspector de los cuerpos de gendarmería del Norte se nombra a un mayor retirado.

Estas designaciones se hacen por decreto y esta gendarmería se crea por decreto. No es el momento de discutir si esta clase de cargos se pueden crear por decreto o si para ello se necesita una ley, pero lo cierto es que ese organismo se creó, actuó y provocó conflictos con los gobernadores, con los jueces letrados y serias protestas de los pobladores. Tuvo que ser disuelto.

Hay un segundo antecedente, que ha traído ayer el señor diputado Solari, del cual me han hablado y que no traigo a la Cámara porque no me gusta mencionar hechos si no tengo la prueba correspondiente. Sé que algunas personas responsables, el año pasado presentaron

quejas graves contra el destacamento Norte, antigua compañía de disciplina, que presta servicios de vigilancia en el Norte del país. Tengo entendido que esas denuncias obligaron al ministerio a adoptar las medidas correspondientes y hasta creo que se hizo un sumario y el procesamiento de algunos oficiales de ese cuerpo de gendarmería.

Pero tengan o no importancia, esas denuncias existen y ellas nos obligan a pensar que es cosa muy delicada sacar al ejército de su misión específica. Obliga a la reflexión.

Saliendo de los antecedentes y entrando al detalle del proyecto de ley, nos encontramos con que éste consta de tres títulos. El primero, dedicado a las disposiciones generales sobre la creación y organización de la gendarmería nacional; el segundo, destinado al personal y el tercero a disposiciones transitorias, indispensables siempre en estos casos.

Me interesa analizar este primer capítulo, porque aquí es donde se engendra este organismo, aquí se confirma lo que es principal en todo cuerpo con vida: el espíritu que lo anima.

El artículo 1º dice: «Créase la gendarmería nacional con el carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarla como parte integrante del ejército de la Nación, del cual es independiente, salvo en los casos expresamente determinados en esta ley.»

Concordante con éste, el artículo 16 dice: «El personal de la gendarmería nacional no tiene estado militar». Hasta aquí estamos perfectamente de acuerdo. Pero el artículo 7º también dice que en todo lo que se relacione con su instrucción, estará sometido al régimen del ejército; en consecuencia, su personal se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar. Confieso, señores diputados, que al leer estos tres artículos, una profunda duda asaltó mi espíritu. La primera pregunta que se planteó a mi espíritu fué ésta: ¿Puede un ciudadano ser sometido a la justicia de los tribunales militares no teniendo estado militar? Y deseando aclarar esta duda, contestarme esta pregunta, inicié una serie de lecturas de cosas para mí absolutamente ignoradas. Fuí y leí a ese hombre que es una especie de propietario del Código de Justicia Militar argentino, el doctor Bustillo, el Vélez Sársfield del código de la justicia militar argentina, un hombre en cuya mentalidad el Parlamento ha hecho fe votando lo que él propuso en aquella época, en que yo supongo habría pocos técnicos en esa materia en nuestro país. Y deseando leer cosas más nuevas,

más frescas, leí varias veces el informe producido por una comisión especial designada por esta Cámara para redactar las modificaciones al Código de Justicia Militar, una comisión formada por un distinguidísimo hombre de la derecha, el doctor Manuel Gonnet, por otro eminente hombre del radicalismo, el doctor Vicente Gallo, y por el gran Alfredo L. Palacios. Y he visto cómo esos tres hombres, haciendo honor a esa designación de la Honorable Cámara, se encierran a trabajar en este asunto. Realizan cincuenta reuniones, largas reuniones, donde en el silencio de la comisión ellos analizan y discuten sus ideas.

Y no hablemos de la serie de conferencias y de citas, todas documentadas, de consultas a generales de la Nación, a almirantes, a jueces militares, a profesores de derecho. Cualquiera creería que yo he tenido que leer dos o tres mil páginas; pero no: de todo ese profundo y largo estudio surge una joya, un informe de pocas páginas, todo substancia, todo médula, todo concisión.

Y buscando fuentes más nuevas aun, he terminado leyendo otro proyecto de reformas al Código de Justicia Militar presentado posteriormente, con fundamentos extensos e interesantes, presentado por un distinguido miembro de esta Cámara, el ex diputado Albarraeín, que también perteneció al ejército porque fué auditor de guerra. Y en ese estudio serio y profundo su autor llevó de la mano al hombre profano que lo leía, enseñándole lo qué es esta ley extraordinaria, de excepción; cómo se ha ido organizando la disciplina en las primeras agrupaciones humanas, y cómo se ha descuidado en nuestro país, esto que más que un código puede llamarse la síntesis del derecho militar. Estudios despreciados en la facultad, pues apenas constituyen una bolilla del plan, cuando deberían constituir una materia, porque existe un derecho militar, como existe un derecho civil y un derecho comercial.

Todas esas lecturas, señores diputados, me han afirmado en el convencimiento de que si esta ley niega expresamente en uno de sus artículos el estado militar a sus componentes, eso imposibilita que se les pueda aplicar el Código de Justicia Militar.

Entonces no sería cierta la afirmación elemental de que los tribunales militares entienden exclusivamente en delitos militares. Yo me atrevo a afirmar, señores diputados, con profundo convencimiento, que frente a las disposiciones del Código de Justicia Militar, los tribunales militares argentinos se van a de-

clarar incompetentes ante el primer gendarme procesado que se les presente. Y se fundarán en los artículos 117 y 118 de ese mismo código, el primero de los cuales establece que «este código sólo aplica sus disposiciones a los militares». Y ya prevé, con la ley en la mano, que el personal de la gendarmería no forma parte del ejército nacional. Pero yo me he preguntado a mí mismo si no salvaba esos escollos legales ese otro artículo de esta ley, que dice que el personal de la gendarmería, en lo relativo a la disciplina, se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar, y me contesto que no importa que la ley en otro artículo diga eso, porque, aun así, sería inconstitucional, ya que ninguna ley puede sacar a los ciudadanos de sus jueces naturales, según lo determina claramente la ley de las leyes.

Entiendo, señores diputados, que desde mi posición modesta de hombre que no tiene ninguna autoridad científica sobre esta materia de derecho militar, planteo una cuestión seria, planteo una duda que bien merecería, si no tuviéramos este apresuramiento por votar la ley, que el despacho fuera a la comisión pertinente de la Cámara, pues hay una comisión competente formada por profesores de derecho, que nos podrían decir si es constitucional o no lo es.

Creo que es una grave equivocación ésta de afirmarse en una postura y votar esos proyectos —como lo dijo muy bien el otro día el señor diputado Lazo, con motivo de otro asunto— con sentido de grupo. Yo creo que estas cuestiones se traen al recinto para ser analizadas, para ser discutidas y hasta para ser modificadas o rechazadas, como resultante de aquellos análisis. De lo contrario, estas discusiones no tendrían razón de ser. Si votáramos con ese criterio de grupo, las deliberaciones de este cuerpo serían una ficción. Bastaría con el despacho de la comisión. La comisión se reuniría, produciría despacho en mayoría y aquí sin discutir nada, lo sancionaríamos.

No podemos abocarnos a la solución de este asunto con criterio de delistas. Me siento con autoridad para hacer esta afirmación, porque yo no sólo voy a votar contra un proyecto del Honorable Senado, no solamente voy a votar en contra de un proyecto de ley para cuya discusión concurren dos señores ministros que vienen espontáneamente a participar de la deliberación, dándonos la oportunidad de escuchar la palabra del señor ministro del Interior, quien, con toda su autoridad dice que el Poder Ejecutivo vendrá siempre a esta Cámara a colaborar y a dar informes.

Yo voy a votar, además, en contra de una ley que, como dije al principio, es copia fiel de un proyecto que ha sido firmado por el jefe de mi partido. Y que no solamente trae la firma del jefe de mi partido, sino que con ella viene la de quien fué uno de sus más grandes ministros, un hombre que se sienta en esta Cámara y a quien me vinculan sentimientos que van más allá de los afectos personales, porque son los sentimientos de una profunda admiración. Y votaré en contra de todo eso, porque lo he estudiado y me parece que tiene fallas fundamentales.

El segundo artículo del proyecto establece claramente la misión de la gendarmería «que tiene carácter de policía federal». Pero el proyecto olvida que hay una policía territorial que no va a desaparecer. Y yo pregunto cuál es el criterio de la ley para deslindar la zona de acción entre la gendarmería y la policía territorial actual, que, repito, no desaparecerá. La ley, al respecto, no dice una palabra.

Yo sé que el señor ministro de Guerra, según manifestó en el seno de la comisión, se preocupará de hacer una buena reglamentación. No conozco esa reglamentación, pero me atrevo a pensar que será efectivamente buena, lo que, sin embargo, no constituye un argumento que me convenza como legislador, porque no puede dictarse una ley porque haya de ser buena su reglamentación, dado que, mañana, al modificarse puede resultar mala.

Yo anuncio que han de producirse conflictos de jurisdicción a cada rato. No olvidemos que la ley actual, que es el estatuto de los territorios nacionales, la ley número 1.532, establece claramente que «la autoridad local superior encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales» es el gobernador del territorio. La gendarmería por esta ley, en su carácter de policía federal, tendrá como misión velar por el mantenimiento del orden y de la seguridad pública, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las leyes de la Nación. Es evidente, pues, que el conflicto será fatal, que el choque tendrá que producirse. Una de estas dos fuerzas tendrá que someterse a la otra: o la gendarmería al gobernador o éste a la gendarmería.

Como no puedo olvidar que soy miembro de la Comisión de Territorios Nacionales, tendría que aprovechar la oportunidad para hablar de ese tema interesante y grave que es la policía de los territorios; pero después del discurso del señor diputado Solari, que ha sido completo en este aspecto, no tengo nada que decir

aquí. Hago míos los conceptos que él enunció sobre la policía.

Yo pensaba leer las últimas memorias de los gobernadores de los territorios del Sur, fuente insospechable, dado que son distinguidísimos jefes del ejército y de la armada. Pensaba traer la opinión de los jueces, que he requerido personalmente con el ex diputado Buira, en la gira que hicimos el año pasado y pensaba informar a la Cámara del resultado de las visitas a todas las cárceles de los territorios y traer índice de la delincuencia y los estudios que habíamos hecho sobre el tipo de delincuencia común en el Sur, en donde, de diez hombres procesados, cinco lo eran por delitos de sangre. En todos su historia era igual: después de la esquila, embriagados, inferían una puñalada por causas insignificantes. El otro 50 % de detenidos lo era por robo de ganado. He aprendido allí que cuando un hombre roba un capón, comete hurto de ganado menor, y que cuando roba dos, entonces comete hurto de ganado mayor y tiene en consecuencia mayor pena por ser distinta la calificación.

La delincuencia de los territorios del Sur es ésa.

Quiero hacer al discurso del señor diputado Solari un agregado casi insignificante. Quiero informar a la Cámara que los actuales jefes de policía de los territorios del Sur, desde luego, los hombres de confianza de los excelentes gobernadores de esos territorios, son todos viejos empleados, hombres que han hecho allí toda su carrera. Señalo este hecho como una prueba de que todo no habrá estado pervertido allí, cuando esos excelentes gobernadores han ascendido a estos hombres humildes a esos altos cargos.

Yo sintetizaría el discurso que sobre este asunto hizo el señor diputado Solari, diciendo que el problema de la policía de los territorios es un problema de hombres, de jerarquización de los hombres. Esa obra la viene realizando un gran gobernador del Sur, el teniente de navío Gregores, y la está realizando con escasísimos recursos. A cada comisario de pueblo lo está dotando de una magnífica casa con toda clase de comodidades. Jerarquizando al hombre, se le obliga al cumplimiento del deber. Creo, señor ministro del Interior, que teniendo buenos gobernadores en los territorios, tendremos buena policía, y que si no se tiene buenos gobernadores no se tendrá buena policía.

Nosotros, en nuestro informe a la Cámara, fuimos claros en este aspecto de la cuestión y tenemos el derecho a ser creídos. No debe olvi-

darse que somos diputados de la oposición. Pero al ir a los territorios revestidos con la representación de la Cámara, olvidamos ese carácter. La prensa en general estaba a nuestra disposición.

Podríamos haber atronado el espacio con informaciones sobre la falta de argentinización, la falta de educación, y todas esas cosas espeluznantes a las cuales se refirió el señor diputado Solari. Pero a la satisfacción subalterna del opositor formulando cargos, hemos preferido la satisfacción superior de la verdad, y cuando algo se nos ha preguntado de nuestro viaje, no es el diputado de la oposición el que ha contestado, sino el juez que la Honorable Cámara designara oportunamente para estudiar el estado social, político y económico de los territorios nacionales.

—Suenan la campanilla que anuncia la expiración del término reglamentario acordado al orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Ha vencido el plazo, señor diputado.

Sr. Solana. — Solicito a la Honorable Cámara que me conceda una prórroga.

—Se llama para formar quórum.

—Después de unos momentos de espera:

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Se va a votar si se concede la prórroga solicitada por el señor diputado.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Puede continuar el señor diputado.

Sr. Solana. — Termino este capítulo referente a la policía de los territorios del Sur, haciendo esta afirmación terminante: en los territorios del Sur hay orden, hay tranquilidad y hay garantías para todos los derechos.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Me interesa pasar ahora a un aspecto interesante de la cuestión: la situación de la gendarmería frente a la justicia. Todo lo que pueda afectar a la justicia tiene que preocuparnos, máxime en estos momentos en que ella cobra candente actualidad. Policía y justicia están siempre unidas por un nexo indestruc-

tible sobre todo en los territorios, donde la policía tiene la función extraordinaria de verdadero juez instructor. A las manos profanas del comisario de policía la ley confía el levantamiento del sumario en base al cual se puede dictar la prisión preventiva del acusado. Y yo pregunto: esta falla de la ley que confiere al comisario de campaña funciones de verdadero juez instructor, ¿la vamos a corregir con más policía?

Lo que necesitan los territorios nacionales son más jueces instructores, o por lo menos, más secretarios para que tengan funciones de instructores. Esas cosas modestas las hemos propuesto nosotros como consecuencia de ese largo viaje por la Patagonia. No hemos venido a proponer soluciones de alto vuelo. Gran parte de la solución del problema de hacer efectivas la tranquilidad y la garantía de todos los derechos se alcanzará mediante esa pequeña modificación en el presupuesto, creando más juzgados en la Patagonia. Hay que creer en la acción moral del juez. Cerca de él, el poblador de los territorios se siente más protegido, más seguro en sus derechos, por la sencilla razón de que se siente más dueño de su libertad.

En materia de justicia, en los territorios estamos, desgraciadamente, peor que en el año 1884, cuando se dictó el estatuto legal de los territorios nacionales, informado en esta Cámara por el entonces joven diputado Ramón J. Cárcano. Mediante la reforma de la ley originaria, se estableció que los jueces letrados sólo durarían cuatro años en sus funciones, quitándoles así la garantía de permanencia que les acordaba la primera ley, que los equiparaba a los de la Capital Federal. La Cámara se va a asombrar cuando diga que la rica y hermosa gobernación de Tierra del Fuego, que tiene casi un millón de ovejas y un frigorífico que faena 250.000 ovejas por año y que ha sido incluido en la cuota del tratado Roca - Runciman, no tiene juez letrado, y los litigantes tienen que afrontar largos viajes por mar, a veces de 8 días, para llegar al juez letrado. La Cámara se va a asombrar también cuando le diga que la Patagonia inmensa, con 20.000.000 de ovejas — la mitad de las que tiene el país — y de cuyo territorio se extrae gran parte del petróleo argentino, no tiene un tribunal superior, una cámara de apelaciones. Esto hace que los litigantes prefieran renunciar a toda apelación antes que afrontar dos, tres o cuatro viajes del lugar donde viven hasta donde funcionau las cá-

maras, sobre todo en las épocas del año en que la nieve hace difíciles los viajes.

Yo no hago esta reclamación fundándola en esa razón de procurador de tribunal de menor cuantía, que podría ser el argumento de la distancia exclusivamente. La hago como diputado que cree indispensable que este Parlamento determine la creación de un tribunal de esa categoría en la Patagonia y otro en el Norte, por el tono moral que estos tribunales dan a la zona, a los jueces, al mismo foro, y por la mayor garantía de justicia que ellos significan.

Tengo aquí sobre mi banca, datos que considero interesantes para la Cámara y planillas sobre gastos de la justicia. Me he preocupado por saber cuántos jueces tiene cada provincia, cuántos habitantes y cuánto invierte por año en justicia.

Sr. Zunino. — Es muy interesante la relación que está haciendo el señor diputado de su viaje por los territorios nacionales, ¿pero qué tiene que ver eso con el despacho sobre gendarmería que estamos discutiendo en este momento?

Sr. Solana. — Estoy haciendo una relación sobre la justicia en los territorios, asunto que considero íntimamente vinculado con el que estamos discutiendo.

Sr. Guillot. — ¡Cómo no va a tener que ver con el asunto en debate lo relativo a la justicia en la Patagonia!

Sr. Ravignani. — El señor diputado está exponiendo conclusiones fundadas en su experiencia.

Sr. Solana. — Para serle grato al señor diputado por San Juan, a quien no tengo el menor interés en impacientar, voy a suprimir la lectura de esta planilla interesantísima, que pido sea insertada en el Diario de Sesiones (1), planilla que demuestra cosas sorprendentes como ésta: Jujuy, con 106.000 habitantes, tiene cuatro veces más jueces que el Chaco, que cuenta con 300.000 habitantes, porque Jujuy tiene ocho jueces — y está muy bien que los tenga, ojalá tuviera 16 — y el Chaco tiene sólo dos jueces. Mientras Jujuy hace el esfuerzo de invertir \$ 240.000 en justicia, el gobierno de la Nación en el territorio del Chaco, que es el emporio algodónero del país, sólo invierte 100.000 pesos. Por eso creo que todo lo que se relacione con la justicia del país merece nuestra preocupación y ojalá las palabras del presidente del bloque de la derecha sirvan para que trabajemos más tiempo y podamos ocuparnos, entre

(1) Véase pág. 876.

otras cosas, de la justicia de los territorios nacionales.

Sr. Zunino. — Pero todo en su oportunidad, señor diputado.

Sr. Solana. — Por otra parte, hablo con gran tranquilidad, porque advierto que los señores ministros me están haciendo el homenaje de su atención. Les corresponderé, abreviando mi exposición.

Sr. Ministro del Interior. — Lo escuchamos con el mayor placer.

Sr. Solana. — Muchas gracias, señor ministro. Este proyecto de ley tiene dos aspectos interesantes, en su capítulo 2º: uno, está vinculado con la educación: el otro, con la colonización. En ambos casos, discrepo.

El artículo 19 del despacho, dice: «El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para adscribir a cada escuadrón, compañía o grupo de gendarmería el número de maestros de escuela que fuera necesario para el funcionamiento, anexo a los mismos o a sus destacamentos, de cursos de enseñanza primaria destinados a los menores de edad con obligación escolar, en lugares donde no funcionen escuelas o donde ellas sean insuficientes». Y el artículo 20, establece: «El Poder Ejecutivo adscribirá también maestros de escuela y agrónomos en las colonias a que se refiere el artículo 49 de esta ley».

Afirmo que estos dos artículos chocan abiertamente con la ley de educación común, número 1.420, cuyo artículo 12, dice: «La dirección y administración de las escuelas estará a cargo de un Consejo Nacional de Educación, que funcionará en la Capital de la República, bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública». Y el artículo 57 establece que son sus atribuciones: «Dirigir la instrucción dada en todas las escuelas primarias con arreglo a las prescripciones de esta ley y demás reglamentos que en prosecución de ella dictare; vigilar la enseñanza de las escuelas normales de la Capital, colonias y territorios nacionales; dictar —esto es importantísimo— los programas de la enseñanza de las escuelas públicas con arreglo...», etcétera. Por último el artículo 50: «El nombramiento de todos los empleados de la dirección y administración de las escuelas primarias se hará por el Consejo Nacional de Educación.»

Como se aprecia, el contraste de las dos leyes es evidente.

Por otra parte, los señores diputados saben muy bien que donde hay un núcleo de población ha ido allí el Consejo Nacional de Educación y

en pobre o en rico edificio ha levantado una escuela. Nosotros hemos recorrido toda la Patagonia; sin anuncio previo nos hemos bajado en todas las escuelas, en todos los centros de población y hemos visto que el Consejo Nacional de Educación llena su función. ¿Por qué, entonces, esta ley va a cercenar las facultades que esa vieja ley de educación común, una especie de ley sagrada, da al Consejo Nacional de Educación?

Creo que la sanción de este artículo de la ley va a anarquizar la organización de la educación primaria. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo que va a ser grato a todos los señores diputados, para decir que yo entiendo que la escuela primaria ha llenado y continúa llenando bien sus funciones en los territorios nacionales.

Cuando recorriamos la Patagonia, hemos visitado viejas escuelas que tienen 20 ó 30 años de funcionamiento, escuelas que se fundaron cuando el ejército estaba allí y que han seguido funcionando después que el ejército se retiró de allí. Esas escuelas están ubicadas en el fondo de los desfiladeros, sobre la frontera misma, en lugares muchas veces inaccesibles a los que teníamos que llegar a caballo. Y hemos pensado que esas escuelas han sido verdaderas fortalezas de la argentinidad, porque es muy fácil apropiarse de un terreno en el desierto, pero es muy difícil avanzar un metro de tierra cuando se tropieza con un maestro de escuela, con una escuela y con una bandera, sobre todo cuando esas tres cosas son argentinas. (*¡Muy bien!*)

Esas escuelas ya han llenado una gran función y voy a probar a la Cámara que han llenado una gran función. Aquí me va a tener que escuchar el señor diputado por San Juan. Voy a demostrar, leyendo este documento oficial, que es nada menos que el Fichero Nacional de Enrolados, que en los territorios nacionales hay un índice de analfabetismo inferior al de diez provincias argentinas. No las voy a nombrar para no ruborizar a los diputados que las representan, pero este documento prueba que los territorios de La Pampa, Misiones, Formosa, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, tienen un índice de analfabetismo inferior al de diez provincias argentinas, al de diez viejas provincias argentinas, provincias del Norte, atravesadas por los rayos de una cultura casi secular, que en un flujo y reflujo incesante iba de Córdoba a Chuquisaca y volvía no menos radiante de Córdoba a Chuquisaca.

Y sin embargo, esas provincias tienen un índice de analfabetismo superior al de los terri-

torios nombrados. Después hablamos que hay que civilizarlos.

Sr. Zunino. — ¿Me permite el señor diputado?

Creo que en esta cuestión de la gendarmería nacional no está en discusión ni el analfabetismo de la República ni el diputado por San Juan: pero el artículo 19 de este proyecto de ley, al que se refiere el señor diputado, dice que se fundarán escuelas en los lugares donde no las haya o sean insuficientes. Por lo tanto, no está en contraposición a la ley de educación común y a la que se ha referido el señor diputado. Van a complementar lo que el Consejo de Educación no ha podido hacer por falta de fondos o por otras circunstancias ajenas a la ley.

Sr. Solana. — Muy interesante la reflexión del señor diputado. Con un par de interrupciones como esa, destruye mi exposición.

Sr. Zunino. — No crea tanto, señor diputado.

Sr. Solana. — Hay otros aspectos interesantes en la ley y a mi juicio también muy serios: el de la colonización. Es indudable que esta ley tiene un aspecto de ley de fomento completamente simpática. Es una especie de ley realizadora de ese gran espíritu que animó a la ley de colonización que he mencionado: la ley del hogar.

Pero me atrevo a afirmar que ese aspecto simpático de la ley no se va a poder cumplir, y voy a afirmarlo con las palabras que ayer el señor diputado Amadeo y Videla pronunció en este recinto contestando dos discursos muy difíciles de contestar, palabras que no necesito leer en el Diario de Sesiones porque escuché con mucha atención al señor diputado Amadeo y Videla y tengo buena memoria. Esos dos grandes discursos los contestó a la inglesa, con pocos adjetivos, con muy pocas palabras, pero con muy buenas ideas. Dijo: hay una falla de fondo en este problema de la colonización porque falta la ley madre que contemple los cuatro fundamentos principales de toda ley de colonización, que son: el terreno, el clima, el hombre, y lo último, que es el proceso de financiación de la ley.

Haciendo míos esos conceptos del señor diputado Amadeo y Videla, afirmo que el aspecto de colonización de esta ley fracasará porque no se contempla uno de esos puntos fundamentales: la capacidad del terreno. Es indudable que los hombres que han redactado esta ley tienen muy buena voluntad, pero desconocen en absoluto los índices de producción de la tierra que se va a manejar. En esta ley, por ejemplo, se dispone colonias de 10.000 hectáreas para Santa

Cruz, para Chubut y Tierra del Fuego, y yo afirmo, señores diputado, que será imposible cumplir la ley en esos campos porque el mejor campo de la Patagonia tiene una capacidad que va de 600 cabezas de ovejas a 1.200.

Es explicable que la ley del hogar determine extensiones de 200 hectáreas para la provincia de Buenos Aires, donde una familia puede en esa extensión vivir y prosperar; pero en el Sur, en cualquier campo, aun en La Pampa central, es completamente distinto. En La Pampa central una familia apenas podría vivir miserablemente en 200 hectáreas y en el Sur se moriría.

De modo que esta ley no podrá cumplirse por más buena voluntad que se tenga en su aplicación. Se trata de un defecto esencial de la ley.

Sin querer hacer cátedra, entiendo que una ley tan completa, que abarca aspectos tan importantes y serios no solamente en lo relativo a la educación sino en esto de la colonización, debería pasar a informe de las comisiones respectivas: dándose intervención a los técnicos se elaborarían leyes casi perfectas.

Respeto mucho la preocupación de la Comisión de Guerra y Marina, que ha analizado y despachado esta ley; pero hay cuestiones que escapan al resorte de esa comisión. No es que quiera hacer una pequeña cuestión de resentimiento, porque la Comisión de Territorios Nacionales no haya sido consultada. ¡Cómo se explica que no haya pasado a esa comisión si el proyecto afecta directamente a los territorios nacionales! Es una simple consideración general que me parece oportuna.

Dejo sentado, pues, que esta ley nace con esa falla inicial. Herida en el vientre materno.

No quiero hacer una cuestión pequeña analizando las preferencias que en sus artículos se dan a los militares. No padezco de manía persecutoria. No voy a referirme a las preferencias a los hijos de militares y a los gendarmes, y por ello a suponer que se vaya a formar un pueblo típico, con sentido profesional o de familia, porque conozco nuestro temperamento; ya no se pueden crear pueblos característicos así. Ellos pudieron crearse en un tiempo determinado de la historia. En el Sur, los galenses, por razones geográficas, tuvieron que encerrarse en 150 ó 200 familias, porque tenían que luchar contra el desierto y contra los indios. No había comunicaciones, y entonces se cayó en la consanguinidad, degenerándose el tipo racial primitivo. Quien recorra hoy el Sur argentino puede aún percibir esos signos.

—Suena la campanilla que anuncia la expiración del plazo acordado para hacer uso de la palabra.

Sr. Solana. — Pido a la Honorable Cámara que me conceda nuevamente un cuarto de hora de plazo.

Sr. Presidente (Kaiser). — El plazo es improrrogable. El señor diputado ha hecho uso del máximo de tiempo que acuerda el reglamento.

Sr. Pagano. — Podría concedérsele al orador dos o tres minutos.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia puede tener con el orador una complacencia de dos o tres minutos para que termine su exposición, pero nada más.

Sr. Solana. — Soy muy respetuoso del reglamento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Ruego que ponga fin a su exposición en breve término el señor diputado.

Sr. Maino. — Me parece que la Cámara acordó la prórroga sin limitación de término.

Sr. Presidente (Kaiser). — Acordó una prórroga de 30 minutos, que es el máximo que puede acordar reglamentariamente. Sólo hablan sin limitación de tiempo los diputados que lo hacen en nombre de sus respectivos bloques.

Sr. Solana. — Aprovecharé los breves minutos que me acuerda la generosidad del señor presidente para decirle sobre este interesantísimo aspecto de la tierra pública, dos palabras al señor ministro de Guerra, porque entiendo que los que deseamos estudiar este problema debemos consultar todas las opiniones, y estimo en mucho, la colaboración de los jefes y oficiales militares destacados en el Sur.

Hoy, nuestro ejército está compuesto por hombres de estudio, de disciplinas mentales que se preocupan de sus problemas técnicos y de otros que se vinculan a ellos. No nos olvidemos que los marinos argentinos en el año 18 penetraron en la Patagonia e hicieron interesantes estudios sobre la tierra pública haciendo un informe que, desgraciadamente, no he podido conseguir, pero sé que es un estudio importante. Y a este respecto podría hacer algunas consideraciones ante la Cámara si la tiranía del reglamento no me lo impidiese, porque creo que el ejército está realizando una gran acción en la Patagonia y tengo más fe en la acción del ejército que en la de los gendarmes y comisarios que se van a crear por esta ley.

Volviendo a la cuestión, diré que creo que si el señor ministro sugiriera a los jefes y ofi-

ciales que se preocupen de esta cuestión, podrían ellos suministrar informaciones interesantes.

Sr. Ministro de Guerra. — Puedo asegurarle que es así; y en base a esos informes voy a expresar mi opinión.

Sr. Solana. — Para cuando se trate en particular este artículo de la ley me reservo algunas observaciones.

Termino, señor presidente, diciendo que por estas razones que surgen del análisis un poco apresurado que he tenido que hacer y por otras razones que no he podido dar, voy a votar en contra, no por la gendarmería misma sino por el soplo vital que la anima. Será una luz híbrida, condenada a la esterilidad. Por eso yo niego mi voto a esta gendarmería militarizada. Daría mi voto a una gendarmería netamente militar, funcionando como una división de ejército con ley especial para esa misión especial antes que darlo para ésta. Este punto de vista lo he enunciado en todas las conversaciones con mis colegas y entre ellos con nuestro distinguido presidente de la Comisión de Guerra, general Vélez, a quien le comuniqué mi pensamiento hace tiempo. En «La Prensa» de ayer leí un suelto donde se fija esta idea, perfectamente de acuerdo con la que yo había enunciado. Es una satisfacción para mí estar en tan buena compañía.

Finalizaré esta exposición haciendo más, unas palabras del diputado Guillot cuando el otro día, frente a un asunto también de trascendencia para el país, dijo: «jamás me he sentido menos político y más argentino que en este momento.»

Como él, cuando contemplaba el Valle de Lerma, tendido a los pies del Cristo ubicado en el cerro de San Bernardo, yo he contemplado a los territorios nacionales y a esta ley con ojos de argentino, y no he mirado ni en ella ni en ellos pequeñas cosas de interés banderizo.

Sólo he mirado cosas grandes: hacia el Norte, los tres territorios que nos dan la producción yerbatera y algodonera más grande del país, hacia el Sur, en esa Patagonia inmensa, tierra de leyenda y de embrujo, en donde todo, el suelo, el aire y el hombre, tienen una personalidad propia, en todo ese inmenso territorio del Sur, sólo he visto lo que vió el ilustre coronel Fontana, primer gobernador del Chubut: «La tierra del porvenir». (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Videla Dorna. — Pido la palabra.

Voy a ocupar la atención de la Honorable Cámara lo más brevemente posible, a fin de

dejar fundado el voto del sector demócrata nacional a favor del proyecto que está a su consideración.

El problema de los territorios nacionales no constituye un simple problema. A medida que ha transcurrido el tiempo ha ido paulatinamente adquiriendo mayores proporciones. Estamos en evidente retardo en todo lo que hay que contemplar, estudiar y proyectar respecto al problema integral que afecta a la vida de los territorios.

Con el proyecto que está en discusión, vamos dando un paso adelante y estoy seguro que el Poder Ejecutivo actual está altamente preocupado de estos asuntos y no cabe ninguna duda que en su oportunidad la Honorable Cámara también le prestará todo el tiempo que sea necesario.

Directamente relacionado con estos asuntos está el problema de la vigilancia y seguridad. Así, tenemos que mientras Chile cuida minuciosamente el desarrollo antropogeográfico de sus zonas centrales, especialmente en su aspecto demográfico, nosotros hemos dejado especialmente el territorio austral argentino, en el más completo abandono. Me bastará un ejemplo bien gráfico para demostrarlo así. Neuquén, región cordillerana; chilenos, 47 %; argentinos, 46 %, otras nacionalidades, 7 %. Región de la meseta: chilenos, 44 %; argentinos, 44 %, otras nacionalidades, 12 por ciento.

El problema adquiere aspectos parecidos, predominando en muchos casos, en los territorios del Norte, el elemento extranjero sobre el argentino.

Una ausencia casi absoluta de garantías para las personas y los bienes, caracteriza la vida de esas extensas regiones. Causa de ello, sin duda, es la deficiente policía que hoy existe en los territorios, reducida, sin los medios de movilidad indispensables para esas extensas regiones y con falta de calidad en el personal. a todo lo cual hay que agregar la falta de apoyo de los mismos pobladores, causada por su evidente desprestigio.

Los gobernadores de los territorios, repiten sistemáticamente en todas sus memorias, las solicitudes de aumento de policía. Ya entraremos después a analizar la proporción de esta policía con referencia a la extensión territorial, la población y hasta lo que deben custodiar, para demostrar cómo esto puede ser una alta preocupación de los gobernadores. Pero no crean los señores diputados que la solución está solamente en el aumento de la policía que piden los gobernadores. Para conocer la vida de los territorios hay que considerar algu-

nos aspectos particulares de los mismos. Y antes de seguir adelante es bueno tener presente que el Código Penal destina los territorios del Sur como lugares de destierro para delincuentes. Es así cómo el maleante pulula, a veces, sin adaptarse y se convierte en cuatrero, y no sólo eso, sino que de Chile, los carabineros, en sus batidas contra los maleantes nos vuelcan bandidos de toda laya en la impunidad de nuestras fronteras completamente desgarnecidas. A esto hay que agregar, también, que en nuestros territorios del Sur abundan los desterrados, muchos de ellos voluntarios, con buenos o malos antecedentes, que van a buscar suerte, a los que no siempre les va bien y a los que las mismas necesidades los inducen en muchos casos, a delinquir. Podemos decir que en muchas zonas, por todas estas causas se está operando una despoblación progresiva, agravado ésto por las condiciones climáticas duras, hace que no se produzca el arraigo efectivo que sería de desear en los territorios nacionales.

Podemos decir que los territorios nacionales no absorben la inmigración, sino que son absorbidos por ella. En los del Sur, por ejemplo, los extranjeros importan sus costumbres, sus sentimientos patrióticos y hasta su moneda. En los del Norte, y eso es más grave, hasta se enarbolan banderas extranjeras en los edificios públicos, cuando no la simbólica bandera colorada del bolcheviquismo.

No crean los señores diputados que argentinizar los territorios nacionales sea una empresa corta y fácil, una simple tarea de dominación.

Será necesario largos años, tantos como los que han pasado extranjerizándose y para ello deberán dictarse otras leyes y tomarse muchas medidas con ese mismo fin. No cabe duda de que la primera medida tendente a normalizar esa grave situación sería la de dar preeminencia y debida protección a los argentinos, que hasta se sienten, en muchos casos, extraños en su propia tierra, a sus bienes y a sus haciendas, así como también a los buenos extranjeros que han ido allá a labrarse un porvenir trabajando honestamente. La ley que estamos discutiendo contribuirá sin duda alguna, en gran parte, a normalizar esa situación.

Veamos ahora cuál es la situación actual de las policías de los territorios. Según cálculos hechos por la Dirección General de Territorios Nacionales, existen, aproximadamente, en los 10 territorios nacionales, 10 jefaturas de policía, 19 inspecciones policiales, 110 comisarías departamentales, 15 comisarías de policía, 120

subcomisaría, 300 destacamentos y 10 policías seccionales de capitales. En estas reparticiones el personal, según presupuesto, debe emplearse en las distintas categorías de acuerdo a las disposiciones que tomen los señores gobernadores. Y se llega al siguiente total: jefes de policía, 10; secretario de policía, 1; comisarios inspectores, 19; comisarios, 108; subcomisarios, 145; oficiales, 157; escribientes, 7; sargentos, 230; cabos, 374 y agentes, 2.866. Este personal cuesta a la Nación: sueldos anuales, \$ 8.272.260 moneda nacional; gastos generales, \$ 414.000; moneda nacional; vestuario, refuerzos de partida, etcétera, \$ 1.850.000 m/n.; lo que hace un total de \$ 10.225.760 moneda nacional.

Si hemos de ser francos, la calidad de la policía de los territorios es mala, aunque muchas veces son las circunstancias las que influyen para que los servicios no respondan ni a la cantidad de personal ni al costo. El personal es de limitada capacidad, reclutado en forma irregular y sin los conocimientos indispensables para la misión que se le encomienda. El personal superior es improvisado. El policía está obligado a formarse al frente de una repartición. Aunque hay algunos que son buenos, los más son personas cuyos antecedentes no son recomendables. En muchos casos se trata de individuos cuya preparación es nula en absoluto. Si en algunos casos son personas de buenos antecedentes, se trata, en general, de gente ignorante en absoluto de la función que compete a la policía.

El personal subalterno de suboficiales y agentes es reclutado entre individuos de la región y en general es de pésimas calidades. Es común encontrar entre ellos extranjeros y, lo que es peor, de nacionalidad chilena, boliviana o paraguaya en los territorios correspondientes a esas fronteras. Los argentinos, que en esas fronteras son muy pocos, si se deciden a ser vigilantes es porque no tienen ya a qué dedicarse y, en general, son individuos de pésimos antecedentes. Al respecto voy a relatar lo que refiere un distinguido jefe del ejército en una conferencia que pronunció sobre estos mismos asuntos. Dijo así: «En un viaje que hice a la frontera Norte y debiendo hacer la travesía de Manuela Pedraza, Tartagal, a río Pilcomayo, el comisario del lugar me facilitó un agente de policía para que me acompañara, entretanto realizaba una comisión. Hay que hacer notar que la comisaría de Tartagal estaba formada por el comisario, un señor salteño patriótico y de excelentes condiciones, quien tenía a sus órdenes sólo ocho agentes para todo el servicio,

de los cuales siete eran bolivianos. Yo me decidí por el argentino, desde luego, para que me acompañara, aunque durante el viaje los informes recibidos sobre este vigilante coincidían en afirmar que en una época no muy lejana había estado asociado con un conocido cuatrero de Formosa. En otra oportunidad contraté un camión para un viaje de Santa Victoria a Puerto Irigoyen, sobre el río Pilcomayo y luego, conversando con el dueño, que era quien lo guiaba, supe que era agente de policía, de nacionalidad boliviana, y que resultaba comerciante a la vez que era sargento 1º de la reserva de ese país, ascendido durante la movilización de 1928».

Estos mismos fenómenos pueden observarse en los territorios del Sur. Los chilenos, numerosos allí, generalmente son cuatreritos, ladrones o contrabandistas corridos por los carabineros de Chile.

Voy a citar otro caso que es de una elocuencia abrumadora: En la colonia Ensanche Sarmiento, de Chubut, cansados los pobladores de los frecuentes robos de hacienda, se unen para hacerse justicia por sus propias manos, y cuando le roban a uno se reúnen varios, siguen los rastros y recuperan de buena o de mala manera sus ganados, que los delincuentes siempre llevan rumbo a Chile. Esta es sin duda, una demostración palpable del límite a que ha llegado el desprestigio policial. Nada se ha hecho por prestigiar en los territorios al propio país, ante argentinos y extranjeros. Los servicios públicos como éstos, son el mejor índice del adelanto de una región.

Tengo sobre mi banca dos interesantes fotografías, de las que voy a hacer una breve descripción.

En la primera, tomada en un destacamento policial de Paso de Larca, territorio del Neuquén, figura un sargento de caballería chileno, un sargento de policía argentino, un agente de policía argentino y un ayudante de policía aduanera argentino. Es decir, están reunidos todos los funcionarios que desempeñan servicios públicos de vigilancia y de resguardo aduanero. El sargento chileno, proviene de la escuela de carabineros de Santiago, y los argentinos son paisanos reclutados en el lugar, sin instrucción militar ni policial, y en algunos casos son hasta analfabetos. Y observamos lo siguiente: el chileno aparece con su uniforme perfecto, buen correa, buen sable, buen kepi, chaquetilla perfectamente abotonada, y, en cambio, nuestro sargento de policía aparece con una chaquetilla de verano, desabotonada, seguramente

porque no tiene botones, un chambergo sucio, unos *breeches* que parecen reglamentarios, polainas y unos malos botines; el agente de policía con una chaquetilla de verano, unas bombachas blancas y alpargatas; el agente de policía aduanera, completamente vestido de verano y de alpargatas.

La otra fotografía es un sargento policial argentino y dos carabineros de Chile. Los dos carabineros chilenos aparecen con su uniforme reglamentario, buenas botas, buen capote, y arriba del capote su poncho de Castilla reglamentario; y el pobre sargento policial argentino vestido totalmente de verano, a pesar de que la fotografía fué sacada en el mes de mayo, con cinco grados centígrados bajo cero.

La policía de los territorios nacionales, no cabe ninguna duda, es escasa, pues en una extensión de 1.209.229 kilómetros cuadrados sólo se cuenta con las 110 comisarías, 120 subcomisarías y 300 destacamentos policiales, que en la mayoría de los casos no disponen de personal, ya que todos los servicios deben ser cubiertos con dos mil ochocientos y pico de agentes. Y si establecemos una proporción, llegamos a estos resultados: existe un comisario por cada 12.000 kilómetros cuadrados y un comisario de campaña por cada 10.000 kilómetros cuadrados. Esto en el sentido general y como término medio, pues hay lugares de los territorios donde en 30.000 ó 40.000 kilómetros cuadrados no existe una sola autoridad policial.

La policía de los territorios resulta cara, en relación a los servicios que presta.

¿Qué es lo que debe custodiarse en los territorios con tan escasa policía y qué es lo que justifica que se tomen medidas como la creación de la gendarmería nacional, aunque importe un gasto que parezca crecido a algunos señores diputados?

La superficie de los diez territorios es de 1.209.299 kilómetros cuadrados; la población es de 650.654 habitantes. La frontera total de los territorios es de 5.085 kilómetros lineales. Son informes de la Dirección General de Estadística de la Nación, del 29 de abril de este año. Y según las cifras del censo agropecuario de 1937, en los territorios hay: 4.055.433 vacunos, 20.374.026 lanares, 106.116 mulas y asnos.

El Estado paga por la policía en los territorios nacionales \$ 10.225.260, de los cuales en sueldos se insumen \$ 8.272.000. Paga, pues, \$ 10 por kilómetro cuadrado y \$ 20 por habitante.

La policía, hay que convenir, es de mala calidad por su mala fuente de reclutamiento, por

la falta de elementos en la región misma que reúnan las condiciones necesarias para esas funciones, etcétera.

En síntesis: La policía de los territorios es escasa, cara y de mala calidad, lo que aconseja buscar otro procedimiento para dar seguridad a los territorios, hoy poco menos que abandonados en ese sentido.

Otro problema muy serio es el aduanero. Las fronteras están muy descuidadas; sólo se controlan ciertos lugares, ciertos pasos. Estamos muy lejos de haber organizado, hasta la fecha, un servicio eficiente desde el punto de vista de la vigilancia aduanera.

Para hacer resaltar la absoluta inutilidad de los servicios actuales, bastará hacer notar que en el límite de Neuquén con Chile existen no menos de doscientos portezuelos y pasos, mientras que nuestro servicio aduanero subre solamente cinco de los doscientos. Y, claro, que conviene hacer notar la forma en que los cubre. Esos destacamentos de estas zonas que se llaman «avanzada», están generalmente compuestos de uno y, excepcionalmente, de dos agentes aduaneros que durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo viven en carpas o ranchos al costado de los caminos que vienen de los países vecinos. Durante el invierno, se repliegan, retroceden, refugiándose en las poblaciones más próximas, donde invernan. Por eso ese servicio es inútil, tanto en verano como en invierno; especialmente porque esos servicios son fijos y los caminos están sin vigilancia y son muchos. Los que pretenden hacer pasar un contrabando es lógico pensar que los harán por lugares donde no existen puestos, ya que éstos son tan pocos, y aun por los mismos pasos que no son vigilados, por donde es posible incursionar con toda tranquilidad.

En los demás territorios del Sur, la situación se empeora en proporción a su extensión territorial y, desde luego, en relación al menor personal disponible. En el Norte y Noroeste el panorama no es mejor, porque las fronteras son abiertas y se pasa por cualquier parte. Siendo las extensiones mucho mayores, los servicios aduaneros son muy inferiores. En cuanto a la forma en que se desarrollan estos servicios en el Norte, basta mencionar que de los dos agentes aduaneros que existen en Pocitos, frente a Yacuiba, uno lo paga el Estado, en tanto que los sueldos del otro, son abonados por la Standard Oil, que posee en esa zona grandes establecimientos petrolíferos.

En otros casos, un solo agente aduanero ins-

talado en medio del monte y aislado por completo, ni siquiera piensa, si aprecia un poco la vida, en vigilar los contrabandistas que pasan por sus propias barbas.

Dentro de este estado de cosas, el problema aduanero no puede tener solución. Será necesario el apoyo de la gendarmería que vigilará los caminos, y cooperará en algunos casos con el personal aduanero y lo reemplazará en otros, en forma de asegurar, en la mejor y más económica manera, la compensación de servicios, que son tan indispensables.

La nueva fuerza policial de gendarmería reforzaría la policía actual, reforzaría los servicios aduaneros y desde luego, en cuanto se refiere a la policía actual, facilitará a los señores gobernadores puedan replegarla a los centros de población, a los pueblos y ciudades que están adquiriendo día a día mayor importancia, asegurando así la eficacia de sus servicios.

Aquí se ha expuesto la situación de otros países que han alcanzado soluciones satisfactorias por medio de gendarmería o policía federal. Es evidente que tenemos ejemplos clásicos en América. Sin referirme al de Canadá, está el caso de Bolivia con sus carabineros de aduana y el de Chile con sus carabineros de policía, que también tienen funciones aduaneras. Así es como la solución de la seguridad territorial, ha sido encarada en numerosos países por medio de igual procedimiento.

No es otra cosa que una buena gendarmería lo que ha dado buenos resultados en el Canadá bajo el nombre de policía montada. Bien disciplinada, instruída y profundamente conocedora de un terreno similar al nuestro, tuvo la virtud de terminar en pocos años con bandoleros y cuatrereros de la peor especie que infestaban la campaña canadiense.

El caso de Chile es el más cercano. En zonas muy semejantes a las nuestras, especialmente en su aspecto general, por su extensión y su demografía regional, los carabineros constituyen una de las mejores policías urbanas y rurales, con una eficacia que todos conocemos y que es justo reconocer como excelente. Esos carabineros por la amplitud de su misión han sido organizados en carabineros de aduana y carabineros de policía, destinados los primeros, por supuesto, a la represión del contrabando y los segundos a mantener el orden y la seguridad en todo el territorio. Para tales misiones ha sido necesario elevar el número de los carabineros —y es interesante el dato— hasta

20.000 gendarmes, casi el número de plazas de nuestro ejército permanente.

Bolivia también dispone de carabineros de aduana en una situación un poco irregular, por el hecho de que los servicios aduaneros no pertenecen al Estado, sino a la Compañía General de Aduanas de Bolivia, y sus servicios dependen exclusivamente de particulares; pero forman, sin embargo, una policía aduanera uniformada, armada, bien equipada, en forma superior al resto de la policía boliviana.

Nosotros disponemos también de una experiencia interesante, de una favorable experiencia en lo que respecta a gendarmería. Traigo el recuerdo, sobre todo, para contrarrestar algunos malos argumentos que se hicieron ayer con respecto a lo que hemos hecho en el pasado con estas gendarmerías, improvisadas por razones circunstanciales y cuyo gran defecto fué el de no haberles dado originariamente la organización militarizada prevista en el proyecto que discutimos. Así, en el año 1908, se había desatado en los territorios del Sur una ola de cuatrismo, de asaltos, de secuestros de pobladores, que culminó con el establecimiento de una banda, que fué identificada, de asaltantes a bancos, que asolaban las poblaciones y atacaban especialmente a las pocas instituciones bancarias allí establecidas. Esa banda formada por delincuentes norteamericanos, como los señores diputados recordarán, llegó en su osadía, y procediendo en la impunidad más absoluta, a realizar un fantástico raid a lo largo de la costa, asaltando sucesivamente de Sur a Norte las grandes casas y sucursales bancarias existentes.

La serie interminable de esos hechos delictuosos, que generalmente concluían con el asalto, asesinato y robo, cuando no con el secuestro de indefensos pobladores, indujo al Poder Ejecutivo a crear un cuerpo de gendarmería volante encargado de la limpieza de los territorios del Sur. En menos de año y medio esa gendarmería terminó con los asaltos y robos y con el cuatrismo, y hasta los famosos bandoleros norteamericanos, de triste memoria, encontraron su fin en un combate con cuatro gendarmes y un sargento en el territorio de Chubut.

Hay otro antecedente, pero, para no alargar esta exposición, voy a pasarlo por alto.

Podría argumentarse, señores diputados—ya que hemos hablado de la deficiente policía actual—, que existe el peligro también de que la gendarmería llegue a ser algo así como las actuales. A ello vamos a contestar con funda-

mentos lógicos, tomados del propio proyecto de creación de la gendarmería.

Convengamos que la ineficacia de la actual policía, la de servicio aduanero, etcétera, ha obedecido a las siguientes causas: 1ª — A la mala calidad del personal, falta de disciplina y adecuada organización; 2ª — A la escasez de personal, especialmente de oficiales y agentes; 3ª — A la falta de movilidad por escasez de medios que impide reemplazar el número por una mayor actividad del personal disponible. Precisamente, a evitar que tales causas puedan acrecentarse con idénticos o parecidos efectos, es que se destinan las claras prescripciones del proyecto de ley de creación de la gendarmería nacional, que, en síntesis, podríamos establecer como tendentes a obtener lo siguiente: 1º — Personal capacitado en su dotación y en un sentido orgánico de buena preparación y excelente instrucción física y militar, de conducta intachable y moralidad probada, capaz para actuar en conjunto como aisladamente en todas las circunstancias; 2º — En la formación y organización de las unidades de gendarmería bien organizadas y dotadas, muy bien instruidas desde el punto de vista policial y militar, de gran movilidad a sangre y mecánica.

A propósito, voy a ir a la página 223 del despacho, donde vemos claramente previsto que se le proveerá, como primera providencia, además de las mulas y caballos, de 33 carros con arneses, 23 camiones, 11 automóviles y 30 motocicletas, datos éstos que omitió, no se si deliberadamente, un señor diputado en la sesión de ayer para sostener la rara teoría de que se iba a crear un cuerpo pesado e ineficaz.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Si me permite el señor diputado?

Sr. Videla Dorna. — Con mucho gusto.

Sr. Solari (J. A.). — Entiendo haber hecho una exposición suficientemente clara y en el curso de la misma no tuve en ningún momento el propósito de ocultar dato alguno a la Cámara, porque daba por entendido que los señores diputados estaban suficientemente informados. No les dí mayor importancia a las pocas motocicletas, automóviles y camiones a que se refiere el señor diputado, que, en realidad, van a resultar insuficientes para la gendarmería motorizada, tal como yo la concibo.

Sr. Videla Dorna. — Pero a medida que el servicio lo reclame se aumentarán esos medios de movilidad hasta llegar a darle aviones y aviones sanitarios.

Sr. Solari (J. A.). — Se admite, entonces, que para tener una buena policía, es necesario gas-

tar \$ 20.000.000, cuando con muchísimo menos tendríamos un inmejorable servicio para los diez territorios.

Sr. Videla Dorna. — Quiere decir, que no se trata de una organización tan pesada, que es lo que yo demuestro perfectamente.

Además, reunirá las condiciones que la hagan susceptible de subdividirse hasta la pareja de gendarmes, que representa la célula de este sistema policial.

Estarán preparados para actuar en las lejanías de las llanuras, en los bosques impenetrables de Chaco, Formosa y Neuquén, y a lo largo de las zonas montañosas y aun en la puna o en las regiones desérticas y en las estepas de la Patagonia, acostumbrados a la vida de campaña, que será la normal en ellos, y con muy buenos aprovisionamientos y servicios.

La ineficacia del sistema de policía actual estriba en que aferrada a la población y sin medios de movilidad, no puede esperar que los delinquentes vengán a ella sino que es necesario ir a los delinquentes y tomarlos en los caminos o en los propios refugios. En general, los maleantes de los territorios operan en forma adecuada a su mejor impunidad, y aprovechando la circunstancia de la casi absoluta inmovilidad de la policía actual. Los cuatreros, los contrabandistas, los asaltantes no viven en los pueblos de los territorios sino en pleno monte o en lugares apartados, de donde salen para realizar sus correrías y regresar a sus refugios sin correr el riesgo de ser tomados. En otros casos suelen vivir en el país vecino, donde están asegurados en forma similar.

Entrando a considerar directamente algunos aspectos del proyecto, en el que se evidencia el celo y capacidad con que ha sido estudiado por el Poder Ejecutivo, se desprende que la gendarmería nacional indispensablemente debe ser militarizada, según dice el artículo 1º, que los señores diputados conocen bien, es la única forma de darle la organización, cohesión y disciplina necesarias para que pueda ejercer con eficacia sus funciones en tan vasta zona de territorio. El hecho de ser militarizada no importa en manera alguna considerarla como parte integrante del ejército nacional. Así lo dice claramente el artículo 5º al referirse que es enteramente independiente del ejército, salvo en los casos que expresamente determina la ley. Tampoco a su personal le corresponde estado militar y esta militarización es únicamente a los fines de su organización, instrucción y disciplina.

La función de la gendarmería nacional es enteramente de carácter policial, pues se la hace depender del Ministerio del Interior, según el artículo 4º lo establece. La ingerencia del Ministerio de Guerra, perfectamente bien delimitada en la ley, es indispensable por cuanto la dirección general debe ser ejercida por un coronel del ejército permanente, cuyos servicios deben ser considerados como prestados al mismo. La organización de la misma, en el plazo perentorio de tres años, está a cargo del citado ministerio (artículo 61 del mismo proyecto). Además, en el período de organización y durante dieciocho meses pueden emplearse oficiales del ejército permanente y sus servicios se computan como prestados en unidades de tropa (artículo 62). También ese mismo ministerio es el encargado de las mensuras, amojonamiento y levantamiento de planos de las tierras que se destinen al usufructo personal de la gendarmería (artículo 48). Y a propósito de este artículo vamos a aclarar una nebulosa muy grande que se le ha presentado a un señor diputado en la sesión de ayer con respecto a la situación de que el Ministerio de Guerra fuera el que mensurara y amojonara, y después los gastos corrieran por cuenta de los ministerios de Instrucción Pública y de Guerra. La situación de este artículo surge muy clara y comprensible. Es de todos conocida la existencia del Instituto Geográfico Militar, que es el más capacitado que existe en el país para realizar levantamientos y mensuras.

Sr. Solari (J. A.). — Excelente institución, señor diputado.

Sr. Videla Dorna. — ¿Qué otro organismo nacional podría ejecutar mejor ese levantamiento, realizar esas mensuras? Luego, los gastos corren por cuenta del Ministerio del Interior, por cuanto la organización de esta policía federal militarizada pasa a depender del Ministerio del Interior.

Es justo que el Ministerio del Interior corra con los gastos de estos trabajos de mensura y no que incidan sobre el presupuesto de Guerra, que tiene partidas con destino de otro orden. Y desde luego, el de Instrucción Pública, porque se prevé en la misma ley el establecimiento de escuelas y de lotes especialmente destinados a estos maestros, y es natural que el Ministerio de Instrucción Pública se haga cargo de los gastos de distribución de estas tierras, su relevamiento y su mensura.

Y siguiendo el curso de mi exposición, lo mismo ocurrirá en lo referente a la disciplina e instrucción. Su personal estará sometido al

régimen del ejército, y a esos fines depende del Ministerio de Guerra (artículo 7º), también en lo que se refiere al cuidado y conservación del armamento y del equipo.

Respecto a la sesión de ayer, no puedo pasar por alto el ferviente deseo de dar una explicación que aclare algo más esa nebulosa recogida ayer en cuanto a la interpretación de la ley. El artículo 8º dice: «Los delitos y faltas cometidos por particulares contra el personal en el ejercicio de sus funciones, se consideran como realizados contra la policía». Corresponde en estos casos la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar. Un señor diputado decía: ¿Cómo es posible la aplicación del Código de Justicia Militar? Es que hay que ser previsor en la redacción de las leyes. Hay que prever todas las situaciones; y son tan simples, que yo voy a poner dos ejemplos. Un ebrio en la calle atenta contra un gendarme. Es un procedimiento de simple intervención, considerada la gendarmería en funciones policiales; pero un delito cometido dentro del cuartel o en jurisdicción militar, cae bajo disposiciones distintas. Por ejemplo, en el caso del robo de un capote, o si desaparece un equipo completo o un arma, etcétera, ya se aplican las disposiciones del Código Militar. Y es lo que corresponde.

Sr. Anastasi. — ¿Me permite el señor diputado?

Le hago notar que su opinión no es la de la Suprema Corte Nacional, que ha decidido, el 7 de diciembre de 1931, que corresponde a la justicia común el juzgamiento del delito de encubrimiento de hurto de objetos militares pertenecientes al Estado, cometido por un particular, en un lugar que no es de la exclusiva jurisdicción de las autoridades militares.

Sr. Videla Dorna. — ¿Pero sería aplicable esa jurisprudencia?

Por otra parte, cualquiera situación jurisdiccional que pueda producirse en los territorios nacionales, ya que dependerá exclusivamente del Ministerio del Interior, sabrá en su oportunidad dar el giro que convenga a cualquier situación escabrosa o difícil de resolver.

Sr. Pagano. — Es que el señor ministro del Interior no puede modificar el Código de Justicia Militar ni la ley civil.

Sr. Anastasi. — El tema es complejo.

Sr. Videla Dorna. — Desde luego, no voy a pretender semejante cosa, pero el Ministerio del Interior, al considerar cualquier situación que pueda producirse, sabrá muy bien lo que tiene que hacer.

Sr. Anastasi. — Reconocerá el señor diputado...

Sr. Videla Dorna. — Voy a continuar. No acepto más interrupciones.

Sr. Anastasi. — Volveremos sobre el tema en la discusión en particular.

Sr. Ruggieri. — La verdad es que del texto del artículo no surge...

Sr. Videla Dorna. — Señor diputado: no acepto interrupciones.

Paso ahora al artículo 10, que también fué en parte cuestionado en cuanto a su interpretación.

Dice ese artículo: «El Poder Ejecutivo queda autorizado para incorporar a la gendarmería nacional el personal de policía marítima, guardiacárceles o parte de los mismos, así como el personal de aduana que ejerza sus funciones dentro de la jurisdicción, de las inspecciones determinadas por el artículo 14».

Se trata de organismos federales que tienen su jurisdicción, pero que pueden ser incorporados a ciertos servicios en determinadas circunstancias, según que estén frente a un contrabando en zona marítima o terrestre, o según tengan que colaborar juntos para reprimir cualquier aspecto de la delincuencia. Está, entonces, prevista, en este articulado la relación de esas funciones.

En lo que respecta a estado militar, los componentes de la gendarmería nacional no son militares en actividad, pero por estar sujetos al régimen y organización militar, les corresponde, por lógica, la aplicación de los reglamentos y leyes militares. El artículo 16, en la parte pertinente a estado militar, será debidamente aclarado en la reglamentación.

La partida fijada para el establecimiento de la gendarmería, que es de \$ 11.185.748 m/n., se irá empleando en forma sucesiva, de manera que inicialmente no recargará en forma apreciable las finanzas del Estado, como se ha dicho ayer. El reclutamiento se hará en forma paulatina hasta que se llenen las vacantes, pero no apresuradamente, y en el término de tres años será posible lograr una organización eficiente.

El capítulo reclutamiento y situación del personal contempla la situación del mismo, primando el criterio de selección en todos los casos y en todas las escalas, en forma que responda a la importante función que debe cumplir. Se tiende a constituir la gendarmería con un personal homogéneo y a ello se refieren especialmente los artículos 21 a 30. Sólo los candidatos que satisfagan las exigencias de la reglamentación podrán ser admitidos. Con esto se tiende a con-

seguir personal capacitado. Los tres años que la ley da al ministerio para la organización definitiva de la gendarmería son indispensables para formar, capacitar y disciplinar al personal.

De esta manera la gendarmería será una verdadera garantía de orden y todo el personal deberá pasar por la escuela de gendarmería, donde se hará una selección esmerada.

El artículo 63 contempla la situación del personal que está a prueba. El personal de tropa debe firmar contrato en las mismas condiciones que los voluntarios del ejército y el tiempo mínimo deberá ser por dos años y renovable por un término mínimo de un año. Los jefes no podrán por sí solos rescindir contratos y deberán formar expedientes y dirigirse a la Dirección General de Gendarmería.

Finalmente, hay otros puntos interesantes vinculados a la creación de la gendarmería, y son los siguientes:

Como una consecuencia lógica de la represión del contrabando —el que ahora se practica en gran escala en todas las zonas fronterizas del país—, lograremos un aumento en la recaudación aduanera. Como consecuencia de la creación de la gendarmería, que por principio debe ser alojada en la zona fronteriza, se procederá a retirar a localidades interiores el personal de policía que ahora guarnece la zona, lo que significará un considerable refuerzo para el resto de los territorios nacionales, con las consiguientes ventajas para las ciudades y pueblos en general.

Otro aspecto importante, y que es bueno tener presente, es el turismo. Hay que darle al turismo las seguridades de que hoy no disfruta, lo que se conseguirá, pues la gendarmería se va a establecer, también, en regiones del país donde el turismo va a ser más realizable.

Además, la ley contempla otro aspecto fundamental, el cual surgirá recién cuando esté debidamente organizado el cuerpo, o sea, después de tres años, en cuyo lapso el Ministerio de Guerra se va a preocupar de darle la eficiente organización que señala la misma ley: es el aspecto de la colonización. Indudablemente, no es del caso entrar a reformar este aspecto, malogrando el trámite de este proyecto, cuando es perfectamente factible que con tiempo suficiente se puedan lograr las reformas más adaptables, una vez que el Instituto Geográfico Militar establezca sobre el terreno los inconvenientes que puedan presentar las disposiciones que contiene el proyecto.

Pero, sin duda alguna, es un interesante ensayo hacia la colonización y no hay derecho a contemplarlo con críticas acerbas o caprichosas. Démosle, por lo menos, el asentimiento que merece toda posibilidad de que una vez por todas se establezca en este país una política colonizadora.

La ley contempla el usufructo de las tierras fiscales por parte del personal subalterno de las gendarmerías y con un propósito moralizador prohíbe, en forma terminante, a todos los que formen parte de ese cuerpo, comprar o arrendar propiedades inmuebles, excepto las destinadas a sus necesidades durante el servicio, así como también practicar, directa o indirectamente, el comercio, todo con el fin de asegurar su independencia, sustrayéndolos a las vinculaciones materiales que podrían tener con los pobladores.

En cambio, al asegurarlos a esas mismas personas el usufructo de la tierra fiscal cuando se hayan retirado del servicio activo —cuestión que pertenecerá a la reglamentación de la ley— asegura la colonización con elementos aptos de nacionalidad argentina en aquellas regiones despobladas y casi sin explotar. Por otra parte, la intervención de los agrónomos del Ministerio de Agricultura permitirá explotaciones experimentales bien dirigidas y adecuadas a la zona, y los sobrantes fiscales que sean aprovechables, podrán ser utilizados, también, con estos fines, así como será posible el establecimiento de campos de instrucción, tiro o remonta, que contempla en su articulado la ley.

Para terminar, diré que son muy grandes las ventajas que llevará a la vida de los territorios nacionales la creación de esta gendarmería y una de las más importantes será la de dar una satisfacción moral y material a los habitantes de los territorios, que hace tantos años gestionan, ante la aparente indiferencia de los poderes, la más elemental y primaria garantía a que tienen derecho; disponer de elementos que les aseguren su vida, la de su familia y custodien sus bienes; organizar las fuerzas necesarias para llenar funciones que por no corresponder a las del ejército evitarán que éste sea empleado en detrimento de la defensa nacional; asegurar el cumplimiento de las leyes dentro de los territorios, evitando transgresiones impunes en perjuicio del Estado y de los habitantes; anular el contrabando en la frontera que hoy hace en gran parte ineficaces las medidas adoptadas por el Estado; impedir la entrada al país de elementos indeseables; controlar el tráfico terrestre y aéreo; levantar el concepto moral e

institucional de los territorios nacionales; fomentar la nacionalización por una adecuada dislocación de las fuerzas a los fines esenciales de la vigilancia y seguridad de los habitantes y de las fronteras; propulsar el desarrollo de los actuales centros de población, y fundar otros, facilitando la radicación de nuevos pobladores.

Señor presidente: Así como la marina y el ejército, al ir a los territorios del Sur, son recibidos jubilosamente por los pobladores, téngase la seguridad de que será igualmente recibida la nueva gendarmería nacional. La ley que vamos a votar será el primer paso importante que habremos dado en favor de nuestros territorios, que todos los argentinos aspiramos a verlos convertidos prontamente en verdaderos emporios de riqueza y prosperidad e incorporados definitivamente al patrimonio moral, espiritual y material del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

El estudio del proyecto de ley que está a consideración de la Honorable Cámara, sugiere diversas cuestiones.

Dice que se crea una policía militarizada. Alguno de los oradores que me ha precedido, ha dicho que la militarización es exclusivamente a los fines de la organización y de la disciplina. Si ello fuera así, el carácter de policía no podría ser acordado por este Congreso más que en el carácter de Legislatura local y únicamente para la Capital Federal y territorios nacionales.

Sr. Ministro de Guerra. — Así es.

Sr. Pizarro. — Sin embargo, del texto mismo de la ley surge otra cosa, surge que la policía militarizada puede actuar: primero, en todos los lugares sujetos a la jurisdicción federal, con excepción de los sometidos a la jurisdicción militar; y segundo, en cualquier parte de la Nación, siempre que sea requerida para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. Autoridades federales hay en todo el territorio de la República; por consiguiente, dentro de nuestro régimen federal, en las circunscripciones provinciales. Autoridades nacionales son los jueces federales de sección, son las juntas electorales, son los rectores de las universidades y de los colegios, son los administradores o jefes de los Ferrocarriles del Estado; son también los gerentes de los Bancos y las obras públicas. La Corte, con un mal criterio jurídico, ha venido a crear un nuevo sistema de federalización de territorios de las provincias sin que medie cesión expresa de las Legislaturas, por el solo hecho de que la auto-

ridad nacional haya ocupado con obras públicas o establecimientos nacionales territorio de provincias.

Esta cuestión crea profundas dudas y puede ser origen de múltiples y diversos conflictos. No me extrañaría que esos conflictos se produjeran. La idea en sí es buena y con las limitaciones que el señor ministro de Guerra acaba de formular y las que tendré en cuenta al proponer en detalle la supresión del inciso aludido se sortearían muchas dificultades. Sin embargo, es imprescindible considerar que no se le puede acordar a la gendarmería la jurisdicción que se le ha atribuido en sus similares extranjeras, porque ni el régimen político francés, nacido de la ley constitucional de 1875, de forma unitaria, ni la policía real de Canadá en un sistema también centralizado, ni el régimen de carabineros chilenos de una constitución unitaria, pueden tener vigencia y aplicación dentro del orden jurídico de nuestro régimen federal.

Siempre que la policía de la gendarmería actúe dentro de los territorios nacionales y Capital Federal, de acuerdo. En cuyo caso desde ya queda constancia que el Congreso de la Nación en este asunto está actuando exclusivamente como Legislatura local. Si así no fuera, diré desde ya que el Honorable Congreso de la Nación carece de facultades constitucionales para dictar esta ley. Porque me pregunto: ¿tiene facultades el Congreso de la Nación para crear una policía con jurisdicción en toda la República? Digo sinceramente, que no. El régimen de la vida civil y el control de los derechos ciudadanos corresponde exclusivamente a los gobiernos locales que son, a su vez, por disposición expresa de la Constitución nacional, agentes directos del gobierno federal.

Hemos tenido alguna vez el caso en que fuerzas nacionales no han prestado la colaboración debida a las mismas autoridades nacionales. Algún día esta Cámara solicitó, para hacer cumplir sus resoluciones, el apoyo de la fuerza pública de la Nación. No le fué acordado. En alguna otra oportunidad un juez federal solicitó y obtuvo la cooperación de la marina, dirigiéndose directamente a ella, lo que motivó una resolución ulterior de la superioridad, muy sugestiva. Quiere decir, que esta gendarmería debe limitarse exclusivamente a los territorios nacionales y a la Capital Federal, y nada más.

Otro detalle que observo en el proyecto es que la facultad de la policía, ya sea militarizada o no, no es asegurar el cumplimiento de las

leyes y de la Constitución nacionales. La Constitución nacional y las leyes nacionales se aseguran por los resortes de los poderes políticos constituidos directamente por la misma Constitución, es decir, por medio de los jueces.

La policía vela por el mantenimiento del orden público, pero el cumplimiento de las leyes se asegura y garantiza por el Poder Judicial. Una policía con facultades de otra naturaleza invade jurisdicciones privativas de otros poderes.

Sr. Vélez. — Si me permite el señor diputado...

Considero que el concepto analizado por el señor diputado es que la intervención de las policías como fuerzas nacionales en las provincias o en territorios que no sean federales, se hará a requerimiento de los jueces. ¿A quién se formulará ese requerimiento? A quien tenga la facultad de acordar esa intervención. Eso corresponde determinarse en la reglamentación de la ley.

Sr. Pizarro. — La observación del señor diputado es muy atinada, indiscutiblemente. Cuando un juez requiere el apoyo de la fuerza pública lo hace a la autoridad que dispone de la fuerza pública.

Pero cuando se crea una policía especial de esta naturaleza a disposición de las autoridades nacionales, hay la presunción de que la propia autoridad nacional deberá comandar sobre ella, tanto más cuando el Código de Procedimientos en lo Federal dispone expresamente que el juez federal, por ministerio propio, tiene facultad para ordenar a la fuerza pública la intervención en los asuntos. Cuando ella no concurra recurrirá a la fuerza de carácter nacional. Tiene jurisdicción y facultades propias para ello.

Pero dejando de lado esta cuestión incidental, voy a lo fundamental. Nosotros no podemos quebrar nuestro régimen federal. El Congreso no tiene facultades para crear una gendarmería que en alguna forma vaya a penetrar en el territorio de las provincias: bajo ningún concepto, ni para resguardar una obra pública, ni para cumplir la sentencia de los jueces o de las autoridades federales. Deben valerse de resortes exclusivamente locales. Esta es una opinión uniforme en los autores.

Sr. Ministro del Interior. — Si me permite el señor diputado...

Sr. Pizarro. — Sí, señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — Cuando fallan los recursos locales, ¿a quién puede pedir la

fuerza un magistrado federal? ¿No la pide a la autoridad nacional?

Sr. Pizarro. — Acabo de decirlo. Por disposición expresa de la ley procesal la pide a la autoridad nacional, la cual tiene, además, recursos de otra naturaleza para los casos de contumacia o de incumplimiento de las autoridades locales. No hay autoridad en el país que se niegue a suministrar la fuerza que requiera la ejecutoria de un juez para que se cumplan sus resoluciones, sean buenas o malas. Sería raro y perturbador en nuestro régimen federal acordar, aun hipotéticamente, a las tropas de esta policía alguna ingerencia en el orden provincial.

Hay otra observación. Se ha dicho que es una policía militarizada y en tal sentido es casi innecesaria otra reflexión, pero la voy a hacer para recalcar el aspecto interpretativo de la ley. Si esto importara reclutamiento de tropas, la iniciación de las leyes de esta naturaleza es privativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Si hubiera sido en ese sentido, el Poder Ejecutivo de la Nación, celoso del cumplimiento de la Constitución nacional, hubiese iniciado la ley en esta Honorable Cámara.

Las observaciones que acabo de formular, que detenían mi voto por la posibilidad de que esta ley pudiera afectar a las autoridades locales, quedan contestadas por las manifestaciones hechas por el señor ministro de Guerra y por el señor ministro del Interior.

Por ello considero que esta ley es una ley que contempla aspectos muy interesantes de los territorios y me complaceré en votarla, en general, con la eliminación de los artículos aludidos, sin contar que habrá que corregir disposiciones de otra naturaleza en el curso del debate.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Ministro de Guerra. — Pido la palabra.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — La ha solicitado el señor ministro de Guerra.

Sr. Ministro de Guerra. — Se la cedo al señor diputado.

Sr. Repetto. — Prometo al señor ministro ser breve, y tal vez convenga que el señor ministro me escuche porque así le será fácil disipar algunas dudas que me sugiere el proyecto que está a consideración de la Honorable Cámara.

Comenzaré diciendo, para evitar equívocos, que nosotros estamos dispuestos a dar al país la fuerza militar y la fuerza de policía necesarias para asegurar la soberanía, el régimen constitucional y para garantizar la vida y los

bienes de las personas. No mezquinamos aquí recursos ni elementos para la realización de esas funciones; no queríamos ahorrar en ejército ni en policía sobre aquello que fuera estrictamente necesario para el país. Pero tampoco deseamos que se confundan las funciones policiales con las funciones militares, que a nuestro juicio son de índole técnica absolutamente distintas.

Yo he tratado de llegar a una conclusión sobre la naturaleza del proyecto que está a nuestra consideración y lo hago condensando el juicio en esta frase breve: me parece que este proyecto es una mezcla de funciones mal concebidas y peor combinadas.

Creo haber llegado a una conclusión fundada si pienso para mí, y lo digo, que la función policial es una función que tiene su técnica propia, es una función que no puede ser confiada a un lego, que no puede ser atribuida a quien no ha hecho de ella materia de preocupación especializada. La policía es una cosa y tiene su técnica propia, y el ejército es otra cosa, que tiene a su vez su técnica propia, distinta de la técnica policial.

La policía que nosotros deseamos, especialmente para los territorios, es una policía que tiene a su cargo una función ágil, confiada generalmente a individuos aislados. En persecución de delincuentes, en pesquisas, no se mandan regimientos ni escuadrones; esa función, como la de aprehender delincuentes, está confiada a unidades aisladas.

Así como en la acción del ejército operan masas o grupos, en la acción policial operan individuos aislados, que indudablemente tienen a su cargo una función en la cual la iniciativa individual desempeña un gran papel, lo que no ocurre en el ejército, donde generalmente las masas o grupos reciben órdenes superiores.

En la parte de colonización, que se mezcla a este proyecto, tenemos también una función técnica de carácter individual; pero el trabajo es sedentario. Es inadmisibles que el agricultor tenga que volver a las épocas que tan bien refleja el magnífico bajo relieve que ostenta la estatua de la agricultura en la ciudad de Esperanza, la importante localidad de la provincia de Santa Fe; expresivo bajo relieve que nos muestra al agricultor siempre obligado a arar con el fusil a la espalda. Hoy la función se ha diversificado; el agricultor tiene una función técnica, pero desempeña su acción en forma sedentaria, tiene que estar asentado en su parcela, y si es posible —y es de

regla que así se le exija— con su familia. Y el propósito de población que persigue este proyecto, tampoco se concibe si se piensa que pone frente al hogar —que es la base de toda explotación y de todo progreso agropecuario— el cuartel. Entonces el cuartel está aquí frente al hogar y frente a la acción individual dinámica que corresponde a la función policial. Es evidente que ésta obliga a diseminar todo a lo largo de los extensos territorios, y sobre todo de los territorios limítrofes con países vecinos, patrullas volantes, grupos pequeños de hombres y esa función no se concilia con la construcción de cuarteles donde habremos de agrupar estas grandes masas que no desempeñarán allí, sin duda, su función policial.

Después de estas ideas generales expresadas así tan rápidamente, quiero poner a contribución lo que he observado y lo que la observación de esos hechos me dicta.

Los territorios nacionales ofrecen aspectos y caracteres distintos; hay territorios montañosos, boscosos, pantanosos, y otros en los cuales la vía fluvial tiene para el tráfico interno una gran importancia. Entre estos últimos se cuentan los de Misiones y de Formosa. Estos medios de locomoción, tan importantes para cualquier policía, y mucho más para una policía que opera en un país semidesierto, ¿han de ser los mismos en territorios tan distintos? Se puede aplicar en Misiones el caballo? ¿Se puede aplicar en el Chaco la motocicleta o el automóvil, en terreno tan pantanoso? En las regiones donde las vías fluviales tengan un papel importante en el tráfico, ¿vamos a manejarnos con caballos, automóviles y motocicletas? ¿No sería necesario agregar algún elemento fluvial?

Si el problema a resolver es de policía —y yo no desconoceré que sea realmente en parte ése el problema—, es evidente que hay que reforzar la policía aumentando el número de agentes; habrá que mejorar el vestuario, dar mejores cabalgaduras, sueldos, habitaciones y armas. Todo eso lo reconocemos, pero nosotros creemos que para realizar una función de carácter policial como la que se necesita, no podemos votar la creación proyectada. Concebimos para los territorios una policía que se hace presente y obra por medio de pequeños grupos de agentes que circulen a profusión, que se muevan con rapidez, que estén bien armados, que estén bien dotados, bien pagados, pero no concebimos, para los territorios, una policía regimentada, que viva en cuarteles, con una organización en unidades más o menos numerosas, y que llegue a constituir cuerpos pesados, que forman preci-

samente lo contrario, la antítesis de lo que se necesita.

Si esta gendarmería se crea también con el viejo propósito de levantar en la línea limítrofe de nuestros territorios nacionales una muralla de familias argentinas, creo, señor diputado, que el procedimiento realmente eficaz y racional no está en esa colonización confiada a militares retirados, a hombres que no pueden atender a las necesidades de su hogar, porque están en perpetuo movimiento. Si se quiere realizar este propósito de trazar la línea limítrofe de nuestro territorio, levantando poblaciones, haciendo una verdadera muralla viviente de argentinos, para eso, señores diputados, nosotros consideramos preferible que se cree una cadena ininterrumpida de colonias agropecuarias, puestas a cargo de familias propietarias. Y esas familias colocadas allí para trabajar en lo suyo, serían agentes formidables para el progreso y el enriquecimiento de aquellos territorios; serían factores importantes en el desarrollo de la democracia y del progreso político de aquellas regiones y serían también, señores diputados, los defensores más celosos, más eficaces y más decididos de la soberanía de nuestro país.

Por todas estas razones consideramos que se trata de un proyecto equivocado, y si fuera transformado en ley podría servir, manejado por un gobierno poco respetuoso de las autonomías provinciales, para entrometerse y regir el destino político de algunos Estados argentinos. Es una estructura militar demasiado sólida, excesivamente grande, con atribuciones realmente extraordinarias, sobre todo en el orden político, porque ésta es una fuerza que podrá servir no sólo para ejercer funciones policiales en los territorios, sino que es una institución que podrá servir también para restablecer el orden político en algunas provincias limítrofes. Y si este proyecto, hecho ley, llegara a caer, como digo, en manos de un gobierno que quisiera utilizarla como arma política, podría prestarse admirablemente para ese fin.

Dejo así esbozadas a grandes rasgos estas ligeras observaciones, que no las he querido disimular, pues me habría parecido una actitud impropia no decir lo que siento intensamente sobre materia tan importante. Desearía que el señor ministro de Guerra o el señor ministro del Interior pudieran disipar o atenuar en buena medida una parte de estas aprehensiones o de estas objeciones que me inspira este proyecto de ley.

Nada más.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor ministro de Guerra.

Sr. Ministro de Guerra. — En primer término, se quiere ver en este proyecto de ley una forma vedada para aumentar los efectivos militares del ejército en unos 3.000 hombres.

El ejército no busca ni quiere tener un aumento de esta clase, pues las actividades y la misión a asignar a esta gendarmería divergen fundamentalmente de sus funciones. Es lo mismo que pretender que los bomberos de la Capital Federal representan un tal aumento por el hecho de ser un cuerpo organizado y disciplinado militarmente. Con esto no quiero significar que el Ministerio de Guerra no tiene un interés militar en el proyecto en cuestión: se interesa por la creación de la gendarmería militar como se interesaría por toda otra fuerza útil y disciplinada que se proyecte.

El ejército permanente es, en la actualidad, una fuerza nimia con relación a los problemas de la guerra. Es de todos conocido que la proporción existente entre nuestro ejército de paz y la fuerza movilizable, está representada por una relación de un pobrísimos cociente. Por ello, bienvenida sea toda aquella organización que, como la gendarmería que se proyecta, cumpliendo en la paz una elevada misión de protección y acción social, pueda prestar en un momento dado, dentro de sus condiciones de organización, lo que puedan demandarle mañana, si fuera necesario, las exigencias de la defensa nacional. No deseo en forma alguna con estas palabras pretender una organización militar de la gendarmería, ajena a sus funciones principales de policía, para transformarla en una unidad del ejército.

Creo que es necesario aclarar el concepto sobre lo que debemos entender por una fuerza de policía civil militarizada. Una fuerza de policía tal como la que se proyecta con la gendarmería nacional debe velar, dentro de la jurisdicción nacional, por el mantenimiento del orden y el cumplimiento de las leyes de la Nación, que son funciones esencialmente civiles; pero por la forma difícil en que ella va a tener que actuar en la represión de los delitos, por las regiones extensas donde su acción se va a hacer sentir, por su alejamiento de los lugares poblados, va a tener una importancia excepcional la iniciativa individual, y entonces sólo puede ser confiada esa función a individuos que se encuentren sometidos a un severo régimen orgánico y disciplinario, como es el militar. La gendarmería en nuestro país está llamada a prestar servicios en lugares que son

normalmente de difícil acceso y que durante muchas épocas del año se encuentran materialmente incomunicados con el resto del país. Ello importa dejar establecido que los destacamentos que la gendarmería deberá instalar en los distintos puntos del enorme territorio a vigilar, deben estar organizados en forma tal que su acción aislada lleve la garantía de la más absoluta corrección y eficiencia, lo que sólo puede obtenerse sobre la base de la disciplina militar, que implica dos conceptos fundamentales y de imprescindible respeto: el mando y la obediencia.

Se ha dicho aquí que para solucionar el problema de los territorios nacionales, basta aumentar el personal de la actual policía, remunerarlo mejor, proveerlo de locales. Yo considero que ésta no es la solución, puesto que se está buscando, más que la cantidad, la calidad. La extensión del territorio, la falta de poblaciones, la independencia con que deben actuar los representantes de la autoridad por falta de contralor por parte de la superioridad, forman un ambiente tal que hace difícil, si no imposible, esperar de este personal un desempeño serio, honrado y adecuado a las necesidades de la seguridad y garantías que reclaman los territorios.

Esa es la parte fundamental de la ley que se propone. Se crea una policía con un reclutamiento de oficiales, suboficiales y soldados en forma tal que desde su iniciación lleve la máxima garantía de eficiencia y constituya una prolongación del ejército como elemento de garantía, de orden y de progreso jamás puesto en duda. No es el personal reclutado en la calle o en los comités el más recomendable para constituir la policía en nuestros territorios. No es posible tampoco, como se ha dicho, asignar esa misión al ejército. Es necesario no volver a las viejas prácticas de confiar la seguridad de esas regiones al ejército, aunque ella haya sido en otras épocas desempeñada con eficiencia. Esas tareas, que en otras épocas pudo desempeñar el ejército, no deben confiársele en la actualidad, so pena de apartarlo de su verdadera función.

Por otra parte, el ejército está ahora constituido por un personal muy diferente de aquel que en otras épocas conquistó el desierto. Al ciudadano se le llama a las filas para que aprenda a defender la patria y la Constitución y no es posible distraerlo en funciones ajenas, encomendándole la policía de nuestras campañas. No debe olvidarse que la masa constitutiva de nuestro ejército está formada por la cons-

cripeión y que la instrucción se imparte desde el primer día de su incorporación hasta el día de su licenciamiento, y que no es posible distraerlo en funciones ajenas a su preparación militar, porque, o no se cumple la misión fundamental del ejército, para hacer policía, o no se hará policía.

Además, el Poder Ejecutivo no se cree facultado para emplear a los ciudadanos que por imperio de la ley acuden a las filas del ejército, en funciones diferentes a las que esta misma ley determina.

Ha aparecido como una gran duda, la doble dependencia para la gendarmería nacional. Normalmente, dependerá del Ministerio del Interior, tal cual lo establece el artículo 4º, y del Ministerio de Guerra, en lo relativo a instrucción, disciplina, así como en lo referente a la conservación del armamento y equipo. En lo relativo a disciplina estará sometida al régimen del ejército y, en consecuencia, su personal se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar.

Esta doble dependencia constituye, a mi modo de ver, una situación legal de la gendarmería, que podría sintetizarse diciendo que la vida interior del nuevo organismo depende del Ministerio de Guerra y su acción externa, del Ministerio del Interior. La dependencia del Ministerio del Interior, como ya lo he expresado, se justifica por tratarse de una función civil militarizada, con misión de policía general, esto es, velar dentro de la jurisdicción nacional por el mantenimiento del orden y cumplimiento de las leyes de la Nación, función esencialmente civil.

Por otra parte, a la gendarmería puede incorporarse, también, como lo establece el artículo 10, el personal de la policía marítima, guardiacárceles, o parte de los mismos, así como el personal de aduana que ejerza sus funciones dentro de la jurisdicción de las inspecciones determinadas por el artículo 14, funciones que son completamente ajenas a las del ejército. La dependencia del Ministerio de Guerra se justifica, en este caso, porque es la autoridad más indicada para organizar e instruir a esta fuerza civil dentro de los conceptos y necesidades ya expresados y que tiende a colocarla en un régimen severo, orgánico y disciplinario como es el militar. Y esta dependencia se justifica, porque no sólo se trata de presentarla así organizada al Ministerio del Interior dentro del tiempo que fija el proyec-

to, sino que también debe mantener en estado latente esta situación militarizada.

El sometimiento al Ministerio de Guerra no menoscaba, a mi modo de ver, la dependencia del organismo a crearse con respecto al Ministerio del Interior, a quien competirá fijar los servicios a prestarse por el cuerpo, con sujeción a las especificaciones detalladas en los artículos 2º y 3º.

Por otra parte, la doble dependencia no constituye una creación del proyecto. En Francia, por ejemplo, el cuerpo de gendarmería tiene no ya, una doble dependencia, sino una triple dependencia: está supeditado a los ministerios de Guerra, de Justicia y también a la policía. Al Ministerio de Guerra compete la organización, su comando, la ejecución reglamentaria del servicio y el contralor militar; el cuerpo de oficiales, el de suboficiales y los soldados provienen del ejército. Los informes y comunicaciones que la gendarmería hace a los diversos ministerios son transmitidos en duplicado al Ministerio de Guerra, a quien debe informarse también de todos los acontecimientos importantes y los extraordinarios. La acción de las autoridades policiales o judiciales sobre la gendarmería no puede ser ejercida sino por vía de requisición dirigida al comandante de la gendarmería del lugar. Las indicadas requisiciones deben ser formuladas por escrito y no contener ningún término imperativo. Los oficiales de la gendarmería están bajo las órdenes de los generales comandantes de región.

La guardia civil española y la gendarmería belga tienen también una doble dependencia: dependen del Ministerio de Guerra y del Ministerio del Interior. Su organización y disciplina están a cargo del Ministerio de Guerra.

Como se ve, el sistema que contempla el proyecto es ya viejo en los países de Europa, y posee, pues, en su favor, la experiencia que se ha recogido en ellos. A mi modo de ver, no debe prescindirse de ella, ya que la comparación es de enorme importancia cuando se trata de legislar.

El señor diputado Videla Dorna ha expresado claramente el valor moral y material de las policías de los territorios nacionales, señalando en forma cruda que hoy por hoy resulta verdaderamente ineficaz.

También se ha hablado aquí de cuerpos de gendarmería que fueron creados en épocas lejanas y que por los resultados obtenidos por ellos, hacen tal vez apreciar como mala solución, para la defensa de nuestros territorios, la

creación de la gendarmería nacional que se proyecta. Quiero advertir que aquella gendarmería no fué creada por el Ministerio de Guerra, ni tuvo ninguna intervención, y que, precisamente, por la forma como se reclutó su personal, sin un régimen severo de disciplina, en otros términos, por no haber sido militarizada, debe atribuirse su fracaso y no a las causas que aquí se han indicado.

Se ha hablado, también, del regimiento de gendarmería en Formosa. Este no es un regimiento de gendarmería nacional, tal como se pretende organizar en el proyecto que se discute: es una unidad del ejército que, más que un servicio de policía interior dentro de la gobernación, responde a una necesidad de vigilancia exterior, de protección de fronteras.

Se ha hecho referencia en el seno de la Honorable Cámara, a denuncias presentadas por algunos pobladores. Debo declarar que ellas se refieren a hechos aislados. No tengo conocimiento de que pobladores de Formosa hayan solicitado el retiro del regimiento de gendarmería. Nada ha llegado al Ministerio de Guerra, ni he leído publicaciones serias al respecto.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Si me permite, señor ministro...?

El diputado que hizo referencia al regimiento de gendarmería que tiene a su cargo la vigilancia de la zona militar de Formosa, fui yo. E hice también mención a la existencia, según mis noticias, de un sumario que el Ministerio de Guerra habría resuelto iniciar con motivo de denuncias llegadas a dicho ministerio a propósito de algunos hechos que yo no califico porque no los conozco, acaecidos en esa zona militar.

No conozco tampoco el resultado del sumario, y las publicaciones responsables a que aludí son del diario «La Prensa» que recogió, en una información bastante completa y amplia, esas noticias a que me referí.

Sr. Ministro de Guerra. — Ya he dicho que los hechos que se han presentado a la Honorable Cámara son pura y exclusivamente hechos aislados, que no afectan la función del regimiento de gendarmería de Las Lomitas ni la misión que le está encomendada.

Sr. Solari (J. A.). — Le he preguntado al señor ministro otra cosa: si hubo sumario levantado y a qué conclusiones se llegó.

Sr. Ministro de Guerra. — Efectivamente, señor diputado. Los autores de los hechos denunciados se encuentran hoy sometidos a la justicia militar tal como corresponde cuando un miembro del ejército se desvía de la corrección que debe tener siempre.

Sr. Solari (J. A.). — Muy bien. Hubo entonces necesidad de hacer sumario y de aplicar sanciones.

Sr. Ministro de Guerra. — Por hechos aislados que no afectan en nada a la misión del regimiento.

Sr. Guglielmelli. — Se refiere a la policía del territorio que es distinta de las funciones de la gendarmería.

Sr. Ministro de Guerra. — Con motivo de la denuncia del diario «La Prensa», se recibió en el ministerio una nota del 30 de noviembre de 1937, que viene de Las Lomitas y que dice: «Enterados denuncia; dada publicidad diario «La Prensa» esa Capital, edición 26 corriente, en nombre comercio y población Las Lomitas hacemos llegar a su excelencia desmentido rotundo afirmaciones hechas en ella. Regimiento gendarmería, con una obra constructiva y civilizadora de veinte años, merece alta consideración todos pobladores territorio y sus dignos jefes, oficiales, suboficiales y soldados acreedores consideración por acción progresista desarrollada. Si alguno de sus componentes ha cometido hechos o actos ilícitos punibles apartándose línea fuera conducta impuesta por superioridad y ética profesional, pedimos y deseamos urgentes sanciones a fin de evitar que embaucadores que se dicen apoderados, pero en realidad son traidores que explotan ingenuidad, buena fe, ignorancia, algunos pobladores, pretenden enlodar prestigio regimiento gendarmería y sus componentes y, por ende, ejército mismo. Población Las Lomitas ruega se haga justicia y espera conocer detalle denuncia y denunciante, para contribuir a total esclarecimiento en defensa buen nombre y honor ejército y sus representantes en ésta. Saludamos a vuestra excelencia con nuestra mayor consideración». Sigue un número de firmas bastante elevado.

Sr. Solari (J. A.). — Si el señor ministro fuera tan amable de concederme otra interrupción para aclarar definitivamente este punto, se lo agradecería mucho.

Sr. Ministro de Guerra. — ¡Cómo no!

Sr. Solari (J. A.). — Al hacer una referencia incidental en el curso de mi exposición creo haber procedido, señor ministro, con absoluta parquedad en cuanto a los juicios emitidos.

Dije que con respecto a la labor cumplida por el regimiento de gendarmería que tiene su asiento en Las Lomitas, mis informes eran contradictorios. Ahora puedo manifestar al señor ministro que tengo informaciones, podría decir, casi directas, desde luego, absolutamente favo-

rables a algunos aspectos importantes de la obra, cumplida por ese regimiento a través de veinte años de acción, y cabe a mi lealtad decirlo porque tengo a mi alcance documentos que me permiten abrir en cierto modo un juicio con respecto a una labor efectiva y fecunda de ese regimiento que, como expresé, está integrada por cien soldados conscriptos y los dos escuadrones restantes con un total de doscientos soldados voluntarios.

Pero el señor ministro, que ponía en duda en su primera parte, al referirse a este asunto, la existencia de publicaciones responsables, ha venido a coincidir conmigo en que las hubo, y tengo sobre mi banca, de fecha 26 de noviembre de 1937, una información bastante completa, dentro de su concisión, publicada en «La Prensa», no como telegrama sino como noticia comentada, y hacía, precisamente, referencia a denuncias de graves hechos en la zona militar de Las Lomitas. Los pobladores de la zona piden traslado del regimiento de gendarmería, y los pobladores de la zona militar del departamento Patiño, eran, precisamente, los que solicitaban la intervención del Ministerio de Guerra, denunciando, entre otras cosas, las pérdidas frecuentes de su ganado, ya sea por su arreo en conjuntos numerosos, o bien, por la cantidad de animales cuereados en pleno campo, muertos de bala, cuya comprobación es frecuente en la zona de los fortines.

Aparte de otros hechos más o menos graves que relata esta información. Y «La Prensa» indicaba que el Ministerio de Guerra, ante el carácter de las denuncias recibidas —y lo digo señor ministro para que aprecie que no he traído una información antojadiza, sino que la he tomado de una fuente seria— el Ministerio de Guerra dió traslado de las mismas al comando de la tercera región del ejército con asiento en Paraná, a cuya jurisdicción compete el regimiento de gendarmería. Hemos podido informarnos que por su parte el comandante de aquella división ha recabado información sobre dicho asunto al jefe de aquella unidad, destacada en Las Lomitas.

Me complace, desde luego, haber escuchado al señor ministro la declaración de que el sumario se realizó, que llegó a conclusiones, que se aplicaron las medidas consiguientes. No puede esperarse sino eso de un ministerio que guarda tan celosamente la disciplina de sus subordinados y aún de los hombres que directamente tiene a su alcance, en cuanto a funciones directivas o superiores. Pero no he podido dejar pasar en silencio —y le agradezco al señor ministro me haya permitido la inte-

rupección— su duda con respecto a la existencia de informaciones recibidas y a la existencia de un hecho que el señor ministro en definitiva ha coincidido conmigo en que existió.

Sr. Ministro de Guerra. — Las palabras del señor diputado confirman lo que he dicho: se trata de hechos aislados. Y quiero aclarar una vez más que si bien en las publicaciones de «La Prensa» aparecen personas interesadas en solicitar el relevo de las fuerzas de Las Lomitas, el telegrama que he leído contiene las firmas de las personas más caracterizadas que representan a las fuerzas vivas de esa zona.

Sr. Solari (J. A.). — Esas firmas serán del departamento Patiño, señor ministro.

Sr. Ministro de Guerra. — Son de personas de todo el territorio de Formosa. Ese telegrama a que he aludido está complementado con otro recibido ayer, en que se formula el mismo pedido, solicitando la intervención del ministro que habla para que sea sancionado este proyecto. Es de los territorios de Formosa y de Chaco.

Voy a analizar en general la organización de la gendarmería, indicando que la experiencia que tiene el ministro de Guerra sobre la organización de las tropas que guarnecen nuestro territorio, y en particular la Patagonia, las informaciones que permanentemente se recogen por intermedio de los jefes de las unidades allí destacadas, el conocimiento personal que tengo yo de esas zonas del país y el que tienen la mayoría de los jefes que colaboraran en la organización de la gendarmería que se proyecta, son las garantías que puedo dar a los señores diputados sobre la eficiencia que tendrá dicha organización.

Ya cuando tuve que informar a la Comisión de Guerra y Marina expresé que este organismo debe ser ágil, liviano y flexible para poder adaptarse a las características de los terrenos de las distintas regiones.

El señor diputado por la Capital en su exposición dejó la impresión de que este organismo iba a estar alojado en cuarteles, por grandes unidades constituidas como en el ejército, es decir, por regimientos. De ser así, como es lógico, su acción policial iba a adolecer de las fallas correspondientes a un organismo que, debiendo realizar un servicio policial y de vigilancia en cordón, se encontrase concentrado en un determinado lugar.

El artículo 12 dice que la gendarmería nacional se organizará en escuadrones o compañías, o en ambas a la vez, según lo determine el Poder Ejecutivo; que estas unidades —escua-

drones o compañías— se agruparán únicamente a los efectos de la administración, contralor y comando, y se reunirán en los casos especiales que así lo impongan, en medios regimientos o regimientos.

Quiere decir, que la unidad orgánica es el escuadrón, y entonces no se puede pensar en la construcción de grandes cuarteles para alojar regimientos.

Por otra parte, la cantidad que prevé la planilla, que es de 2.500.000 pesos para cuarteles y alojamientos, resulta totalmente insuficiente, porque sabemos ya lo que cuesta, por la experiencia de las construcciones que se han hecho en la Patagonia, un cuartel con las comodidades y el *confort* que exigen esas regiones, para una unidad que tenga un efectivo de mil hombres de tropa, sin contar oficiales y suboficiales.

Se trata de un servicio, como dije recién, establecido en cordón con puestos adelantados en los lugares más convenientes con un núcleo central como base de los mismos. Luego el cuartel o alojamiento responderá a esa necesidad y se destacarán a grandes distancias, posiblemente, los puestos que sean necesarios para poder cumplir con su misión de policía.

Esta gendarmería debe estar en estas condiciones permanentemente en función. Respondo así a la duda que planteó el señor diputado por la Capital cuando él pensó que tal vez no pudiera cumplirse con la misión policial si se reunían los regimientos en un núcleo central, como unidad orgánica para el empleo de esta gendarmería.

La gendarmería, a través de esta organización proyectada, ha sido tachada de tener características contrarias a las que yo acabo de fijar, de liviana, ágil y flexible. Debe ser así. Dentro del organismo que esquemáticamente he querido representar, para el mejor desempeño de su función, en los lugares o zona más inmediata al punto donde ella deberá actuar existirán los medios necesarios de movilidad para poder así ejercer sus servicios con eficacia.

Cada una de estas agrupaciones de gendarmería debe tener columnas motorizadas para poderlas transportar rápidamente de un lugar a otro cuando las necesidades así lo exijan. Debe disponer, también, de todos los elementos de comunicaciones y debe tener hasta aviones.

Respecto a este criterio se ha objetado que el cálculo de gastos que aparece en las planillas números 1, 2 y 3, no contempla esta necesidad; pero yo quiero referirme a la planilla núme-

ro 1, en la parte que se titula «Otros gastos iniciales de organización», donde dice: «armamento, vestuario y equipo a calcular de acuerdo a la dotación que reglamente el Poder Ejecutivo». Lo que digo se refiere al equipo con que hay que dotar a estas tropas, que no es igual para los distintos territorios sino particular a las características de cada uno. Se trataría de partidas que no figuran aquí pero que en oportunidad habrá que preverlas, porque requieren un estudio meditado.

Sr. Solari (J. A.). — ¿El señor ministro no ha hecho cálculos aproximados?

Sr. Ministro de Guerra. — No es posible, porque el Ministerio de Guerra no puede anticiparse a los acontecimientos; ha hecho su estudio dentro de la fase del anteproyecto, en base a los informes que se tienen. Para precisar con la exactitud necesaria que requiere un proyecto es indispensable ir sobre el terreno mismo a hacer esos estudios.

Sr. Solari (J. A.). — No dudo, señor ministro, que eso ofrece algunas dificultades, pero sabiendo que se trata de 3.000 gendarmes a equipar con vestido y armamento, el cálculo no resulta absolutamente imposible.

Sr. Ministro de Guerra. — Preferiría dejar, señor diputado, este asunto para la discusión en particular.

Sr. Solari (J. A.). — *Con mucho gusto.*

Sr. Ministro de Guerra. — Se ha indicado aquí también, señores diputados, que tal vez, no en los momentos actuales sino en el futuro, con autoridades federales no muy correctas, pudiera emplearse esta gendarmería como un instrumento político o ponerse al servicio de la política. Quiero tocar este asunto porque se relaciona muy de cerca con la función que tendrá el Ministerio de Guerra cuando deba organizar esta gendarmería.

El artículo 11, dice: «Ninguna autoridad podrá emplear, ni aislada ni conjuntamente, al personal de la gendarmería nacional en funciones ajenas a las establecidas en esta ley, a las de su servicio especial y a las de orden interno, de las distintas agrupaciones en que se subdivide». Para poder dar cumplimiento a este artículo, es que con toda previsión su comando será ejercido por un oficial superior del ejército, en actividad, oficial superior que será elegido entre los mejores, que será toda una garantía no sólo por sus condiciones de soldado, sino también por su preparación para poder encargar la organización de esta difícil institución, oficial superior que tiene en su haber prestigios conquistados por ser coronel, por lo menos con

más de 35 años de servicios, producto de una selección rigurosa, como saben todos los señores diputados, y eso ya de por sí constituye una garantía para poder dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11.

Además, el nombramiento de oficiales, como el nombramiento de suboficiales y gendarmes, debe ser propuesto por una comisión cuyas funciones reglamentará el Poder Ejecutivo y que queda establecido así en los artículos 22, 23 y 24, que quiero recordar.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones necesarias para juzgar y analizar antecedentes personales, tomar examen, etcétera, como también las normas a que se ajustarán las comisiones mencionadas en el artículo anterior —se refiere a las condiciones indispensables para ingresar a la gendarmería— para el ingreso del personal de oficiales y tropa de gendarmería.

El artículo 23, dice: «El nombramiento de los oficiales de la gendarmería se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo, de acuerdo con los informes a que dieran lugar las comisiones asesoras mencionadas en el artículo anterior».

Y el artículo 24, finalmente, establece: «El nombramiento de los clases será efectuado por el Ministerio del Interior a propuesta del director general de la gendarmería, basado en el informe de las comisiones correspondientes, cuyos testimonios y el contrato de servicio deben ser agregados al expediente respectivo».

Sr. Repetto. — ¿Me permite una explicación, señor ministro?

Yo he hecho notar, cuando me referí a los peligros políticos contenidos en este proyecto, que descartaba que el actual gobierno, que nos ha hecho ya reiteradas manifestaciones en el sentido del más respetuoso cumplimiento de la Constitución y de la ley, fuera a hacer semejante uso de la ley que discutimos; pero en ese peligro he tenido que pensar forzosamente al leer el artículo 3º, que dice lo siguiente: «Son funciones que se ejercen en cualquier parte de la República, siempre que sean requeridos para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones».

Sr. Ministro de Guerra. — Es así, señor diputado, que he interpretado sus palabras, y con esta exposición quiero dejar sentado que no sólo el actual Poder Ejecutivo, sino cualquier otro, no llegará a usar la gendarmería como un instrumento político.

Sr. Repetto. — No legislamos para hoy, sino para mañana.

Sr. Ministro de Guerra. — Efectivamente, señor diputado.

Como se ve, señores diputados, el procedimiento es el mismo que se sigue en el ejército. Si bien es cierto que los oficiales serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo y los suboficiales por resolución del Ministerio del Interior, ambos lo serán a propuesta de la Dirección General de la Gendarmería, asesorada por la comisión a que hace referencia el número 22.

La ley, por otra parte, asegura la permanencia y estabilidad del personal mientras acredite buenas condiciones de servicio, los ascensos también están garantizados, por cuanto está reglamentado un régimen similar al que se sigue en el ejército, lo que evitará que puedan acordarse caprichosamente. Tanto la estabilidad del personal como la remuneración de sus servicios, procuran al personal de la gendarmería una independencia económica y también una libertad en el ejercicio de sus funciones, que aleja toda posibilidad, a mi modo de ver, de influencias extrañas, especialmente políticas.

Puedo anticipar a la Honorable Cámara que la gendarmería nacional será dirigida con mano firme y segura, que la ponga a resguardo de toda contaminación con factores extraños a los fines de su misión.

Voy a referirme en concreto, ahora, por más que es un punto que se tratará ampliamente en la discusión en particular, al apartado b) del artículo 3º, para darle la interpretación que en mi opinión le corresponde. Se refiere a lo que el señor diputado por la Capital hacía mención hace unos momentos, a las funciones que ejercerá la gendarmería en cualquier parte de la Nación, siempre que sean requeridas para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

Si bien es cierto que las autoridades federales que requieran su auxilio en el ejercicio de sus funciones son el Poder Ejecutivo y sus órganos legales, es evidente que este requerimiento, en su espíritu, no puede ser otro que para los casos de alteración del orden público en que sea necesaria la intervención de la fuerza; y dentro de las jurisdicciones provinciales, para este caso como para aquellos que se relacionen con la represión del contrabando o apresar bandidos, se hará siempre que las autoridades provinciales lo soliciten a las autoridades federales.

Tal vez pueda dar lugar a dudas la interpretación del artículo 63, por lo que deseo dejar bien aclarado su concepto. Dice ese artículo: «Todo el personal de la gendarmería

nacional será designado «en comisión» mientras dure la organización, recibiendo la efectividad recién cuando la gendarmería pase a depender del Ministerio del Interior».

Ese artículo hay que relacionarlo con el 61, que establece que el Ministerio de Guerra organizará la gendarmería nacional, que pondrá a disposición del Ministerio del Interior, totalmente organizada, en un plazo no mayor de tres años, período dentro del cual podrá el Ministerio de Guerra, por propia resolución, disponer la separación de los oficiales, clases y gendarmes, así como el alta del personal de tropa y propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento de los oficiales. El referido artículo 63 debe interpretarse en el sentido de que esta disposición transitoria no tiene otro objeto que permitir al Ministerio de Guerra organizar la gendarmería y que una vez bien seleccionado el personal, acreditadas sus buenas condiciones, probado ya en el terreno mismo de sus funciones, esta gendarmería pasará automáticamente a depender del Ministerio del Interior y desde ese momento comenzarán a regir para ese cuerpo las disposiciones permanentes de la ley.

En cuanto a la forma de designación de los oficiales, previo dictamen de las comisiones asesoras, serán designados por el Poder Ejecutivo; por el Ministerio del Interior los suboficiales y por el director general los gendarmes.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Eso se establecerá en la reglamentación?

Sr. Ministro de Guerra. — Los artículos 22, 23 y 24, así lo establecen. La reglamentación indicará el procedimiento en sus detalles.

Sr. Solari (J. A.). — A eso me refería.

Sr. Ministro de Guerra. — Para no prolongar excesivamente el debate, doy por terminada mi exposición.

Sr. Susan. — Pido la palabra.

Para decir muy pocas por algo que atañe a mi situación personal y para replicar brevemente algunos conceptos de los impugnantes.

Como lo expresó el señor diputado Solana, el bloque de la Unión Cívica Radical dejó a sus componentes en libertad para pronunciarse sobre este proyecto. He estudiado la ley dentro de mi modesta capacidad y puedo afirmar que en mi exposición no he volcado sino sentimientos que se refieren a mi responsabilidad como legislador, separada de mi condición partidaria.

Distribuido el proyecto con la firma de la mayoría de la comisión, su estudio ha provo-

cado reflexiones fundadas. Hemos expresado en la comisión que no creíamos que la ley fuera perfecta, pero que ella podía ser en el recinto, o cuando la experiencia lo sugiriera, modificada en varias de sus partes. Ya el año pasado la Comisión de Guerra y Marina prestó su aprobación al proyecto y en aquella ocasión los diputados de mi sector que pertenecíamos a la comisión lo firmamos en los mismos términos en que ahora está en discusión. He creído que si este despacho se viene repitiendo a través de veinte años por varios gobiernos y ha tenido el apoyo de maestros del derecho, como Matienzo, y de maestros de la medida política y del respeto constitucional, como Tamborini, ha de ser porque constituye un verdadero instrumento de gobierno o de organización, sujeto, desde luego, a las modificaciones que la experiencia aconseje.

En lo que se refiere a algunas objeciones que se han formulado, especialmente por los señores diputados Solari y Solana, ellas han abarcado puntos diversos e interesantes, pero que no se refieren, precisamente, al proyecto que estamos discutiendo.

El diputado Solari fineó gran parte de su impugnación en un artículo de «La Prensa», en el que se hacen objeciones serias en realidad y dignas de considerarse, pero sin desconocer la necesidad de una organización semejante y propiciando que sea netamente militar.

El señor diputado Solari recalcó aquellos aspectos de ese editorial, pero yo, a mi vez, voy a citar párrafos del mismo artículo que respaldan también mi situación y, como él, yo también podré decir que estoy en buena compañía.

Dice «La Prensa»:

«Pero, a pesar de ello, lo que conviene, en los momentos actuales, es que el proyecto se apruebe tal como está, puesto que si se le llegase a introducir cualquier modificación tendría que volver a la Cámara de Senadores y se perdería tiempo. Es necesario no olvidar que ya ha transcurrido la mitad del período de sesiones ordinarias y que bien poco ha trabajado nuestro Congreso en asuntos de beneficio para los verdaderos intereses del país.

«Si se aprobara el proyecto tal cual está preparado, tendríamos la ventaja de que el Poder Ejecutivo podría proceder, legalmente, a la creación inmediata de esa fuerza utilísima...»

Y, termina este artículo, con estos conceptos: «Creada la gendarmería por la ley correspondiente, y realizada su organización, será tarea larga la que vendrá después para que adquiriera

el prestigio y la eficacia que deben ser sus mejores características.

«Durante ese tiempo puede estudiarse y legislarse al respecto. Por eso estimamos que la ley debería aprobarse tal como está y que las modificaciones vendrían más tarde, como fruto de la experiencia recogida dentro de un término razonable.»

El diario «La Nación» también hace consideraciones semejantes y expresa: «Repetidas veces y fundadamente hemos puesto en evidencia las ventajas que comporta esta creación, por cuanto es fácil percibir que ella constituirá uno de los medios más eficaces de favorecer y acrecentar en breve tiempo el desarrollo económico y cultural de 1.208.831 kilómetros cuadrados de tierras comprendidas en la superficie total de los territorios y que, aun cuando alejadas, se abren al progreso, hoy mas que haber, en razón de la obra vial emprendida por la Nación y el establecimiento en el país de nuevos medios de comunicación y transporte aéreos.»

Más adelante dice: «Por otra parte, es menester que la soberanía nacional se extienda de una vez sobre los bosques, lagos, valles y montañas que ellas encierran, en forma de cursos de enseñanza primaria, agrónomos y registros civiles anexos a los escuadrones de gendarmería, y a establecerse con el régimen de seriedad y honestidad que caracteriza a todo cuerpo militarizado y sujeto a los códigos del ejército.»

Vemos, pues, que dos órganos de opinión, y como éstos la mayoría de los que circulan en esta Capital y en los territorios, propulsan la creación de este organismo, sin desconocer que la proyectada ley presenta reparos más o menos serios, pero que pueden ser susceptibles de subsanarse en el futuro.

Los diputados de nuestro sector que integramos la comisión, hemos hecho reparos serios a este proyecto de ley en muchos de los aspectos que aquí se han enunciado. Presionados por el clamor público hemos terminado por firmar el despacho a objeto de que se convierta en ley.

Mi distinguido compañero de sector, doctor Solana, con esa sinceridad y espíritu generoso que lo caracterizan, hizo también un estudio de los problemas de nuestros territorios y formuló objeciones al proyecto que se discute, pero terminó con estas palabras: Quiero una gendarmería militar.

Sr. Solana. — Prefiero.

Sr. Susan. — Vale decir, que el señor diputado, en definitiva, entiende que de un carácter o de otro, es necesaria la gendarmería.

Sr. Solana. — Si el reglamento no me lo hubiera impedido, habría desarrollado mi pensamiento.

Sr. Susan. — Un pensamiento sobre el cual coincidimos muchos diputados.

El propósito de una policía militarizada fué sostenido en la comisión por la mayoría de los diputados radicales; pero cuando este problema se trató en el seno de nuestro sector, se optó por dejar a sus miembros en libertad para pronunciarse de acuerdo a sus convicciones. Algunos de esos miembros sostuvieron que la gendarmería debía revestir un carácter exclusivamente civil. De allí nuestra situación intermedia aceptando su organización con carácter semimilitarizado.

En la discusión en particular insistiré sobre algunos puntos, materia de impugnación.

Sr. Ministro del Interior. — Pido la palabra.

Deseo, simplemente, expresar que a esta altura del debate y no queriendo demorar la votación en general del despacho, sobre el cual entiendo que están de acuerdo la mayoría de los señores diputados, me reservaré para contestar en particular algunas observaciones muy dignas de consideración que se han hecho en el curso de este debate.

Sr. Solari (J. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — Si es para rectificar brevemente, porque el señor diputado ya ha hecho uso de la palabra...

Sr. Guglielmelli. — ¿Por qué no se reserva el señor diputado para la discusión en particular?

Sr. Solari (J. A.). — Yo me reservo para las oportunidades que yo mismo gobierno. (Risas.) Agradezco el consejo.

La Cámara comprenderá que no voy a cometer la imprudencia de insistir en los argumentos que aduje anoche, cuando se inició la consideración de este dictamen.

He escuchado las exposiciones de los señores ministros y, en general, creo que algunos aspectos que no figuraban en el texto del proyecto de ley aparecen aclarados con vistas a la futura reglamentación. Se señalan procedimientos y algunos detalles que no figuran en el texto del dictamen en debate, pero que tienen importancia para el futuro de esta organización.

He escuchado, también, el discurso del señor diputado por Buenos Aires y las breves palabras que acaba de pronunciar el señor diputado por Santa Fe, miembro informante de la mayoría de la Comisión de Guerra y Marina; pero declaro a los señores diputados que no me encuentro convencido de la necesidad de

esta ley que la Cámara va a votar. Y afirmo, asimismo, con igual sinceridad, que si del cambio de opiniones hubiera surgido en mí una convicción distinta, mi voto se hubiera inclinado a favor.

No se ha hecho, sobre todo por el señor diputado por Buenos Aires, sino el argumento, agitado reiteradamente en favor de esta iniciativa, en el sentido de que la situación de la vigilancia en los territorios nacionales es tan deficiente y corren tantos peligros la vida y las haciendas de los habitantes de esas regiones, que no queda otro camino que establecer esta gendarmería o policía militarizada, como quiera llamársele, que va a insumir los millones de pesos que todos los señores diputados conocen.

No voy a seguir al señor diputado...

Sr. Videla Dorna. — Situación que es públicamente conocida. No es ninguna novedad.

Sr. Solari (J. A.). — ...en el relato un tanto novelesco de algunas situaciones que ha localizado a través de determinados casos lejanos. No he negado en ningún momento la existencia de una policía deficiente, de una policía que no sirve a las verdaderas necesidades de grandes núcleos de población, lo que tampoco ha podido desconocer el señor ministro del Interior que tiene a su cargo funciones que lo colocan en relación directa con esas gobernaciones. Pero así como he hecho justicia a una tendencia que se ha venido observando en casi la totalidad de los gobernadores de los territorios en el sentido de rectificar la conducta seguida hasta ahora, colocándose en disposición de seleccionar el personal de policía adaptándolo a una disciplina y a una organización más severa y eficiente, así también debemos declarar que ha faltado, en algún momento, la preocupación celosa de las altas autoridades del país en lo que toca al estudio y solución de problemas que ahora se presentan como angustiosos y que deben decidir nuestro voto en un asunto de esta magnitud.

No he querido, tampoco, señor ministro de Guerra —no sé si el señor ministro me ha aludido a mí—, no he querido en ningún momento confundir la función del ejército con la función de la policía. Creo haber sido claro en la expresión de mi pensamiento sobre este punto para mí importante. He hecho con la evocación del viejo y glorioso ejército del país el elogio de una fuerza que yo sé que no estaba integrada ni constituida como en la actualidad, pero que al tiempo que conquistó el desierto fué colonizando, fué abriendo brecha al progreso argen-

tino, fué levantando sobre sus fortines desmantelados pero llenos de heroísmo y sacrificio, las grandes ciudades de hoy. No pretendo que ahora el ejército se convierta en grupo de gendarmes que se lance por los montes, por las quebradas, por los llanos, por las montañas, en busca de los delincuentes o contrabandistas.

Quiero que el ejército esté —porque a mi juicio lo permite su actual situación, composición y efectivos—, en todas las latitudes del territorio, sobre todo en las más alejadas, porque la presencia del ejército es la presencia misma de la Nación y porque la Nación, haciéndose presente, lleva al espíritu de todos los habitantes del país la más absoluta tranquilidad en su destino personal y colectivo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

No se me presente, pues, en situación de reclamar funciones policiales perfectamente delimitadas para otros cargos y otras reparticiones, al ejército. He dicho que si se hubiese continuado en el camino seguido en la primera época de nuestro ejército, dejando los regimientos que estuvieron hasta 1907, en Trelew y en Gallegos, habríamos adelantado mucho camino en esta empresa que ahora inquieta, moviliza febrilmente y que pretende reclamar nuestro voto, sin que averigüemos mucho con respecto a algunos aspectos del dictamen que discutimos.

He dicho que la presencia durante treinta años corridos del ejército en esas regiones, como fuerzas tutelares, no policiales, habría contribuido en mucho a solucionar algunos de los problemas que ahora preocupan a los señores diputados empeñados en presentar a los territorios argentinos poco menos que como el refugio de delincuentes, para los que necesitamos entregar 15.000.000 de pesos a fin de detenerlos. Sería esta gendarmería, si ha de tener, como se dice, funciones exclusivamente policiales, la policía más cara del mundo.

Yo votaría, señores diputados, siempre que se me demostrara que con el dinero que se pide se van a atender necesidades efectivas, cualquier cantidad dentro de 3.000.000 ó 4.000.000 de pesos, para seleccionar y disciplinar la policía de los territorios, para exigir a los altos y a los bajos funcionarios el cumplimiento de su deber, y para moralizarlos.

Tratándose de disciplina yo no concibo que sea indispensable aplicar el Código Militar o formar regimientos militarizados. Formulo esta reflexión lógica, sencilla: la policía de la Capital Federal que se ha perfeccionado en el curso de pocos años, ¿tiene acaso una discipli-

na estrictamente militar, cerradamente militar?

Sr. Ministro del Interior. — ¿Como puede comparar el señor diputado el distrito de la Capital Federal con los territorios nacionales, donde la policía tiene que actuar en lugares desérticos y despoblados?

Sr. Solari (J. A.). — Puedo decirle al señor ministro que con el reglamento de la policía de la Capital, con un funcionario celoso del cumplimiento de sus deberes — como no tengo ningún motivo para no considerarlo así al señor ministro — se puede seleccionar y se puede moralizar la policía de los territorios, si los señores gobernadores de los territorios se ponen al ritmo de las exigencias del señor ministro y saben cumplir con su deber.

Sr. Ministro del Interior. — No está en eso la solución. Está, como he dicho en mi exposición, en tener una fuerza militarizada que tenga una rígida disciplina militar precisamente por los lugares lejanos en que tiene que actuar y por las condiciones topográficas de esos medios, que tenga una unidad de comando, que tenga elementos suficientes de movilidad, y que tenga una cantidad de condiciones que no pueden tener las policías de los territorios por más bien organizadas que se quiera tenerlas.

Sr. Solari (J. A.). — He escuchado al señor ministro con suma atención y he apreciado la seriedad de su argumentación; pero me permito recordarle que, contemplando el problema en su conjunto en mi exposición de anoche, me refería a algunos trabajos de funcionarios policiales, a quienes no conozco personalmente, que orientan la solución de estos problemas por otros caminos que no son, precisamente, los de la gendarmería militarizada.

Sr. Presidente (Kaiser). — Si me permite el señor diputado...

La Presidencia se ve en la obligación, para no sentar precedente, de recordarle al señor diputado que reglamentariamente no puede hablar sino una sola vez, y el señor diputado está haciendo uso de la palabra por segunda vez. La Presidencia debe hacer la advertencia al señor diputado, porque, de lo contrario, no podría negar a otros señores diputados el mismo derecho.

Sr. Solari (J. A.). — Le prometo al señor presidente terminar dentro de brevísimos minutos para cumplir el reglamento y para que este asunto pueda votarse rápidamente.

Lo que no he comprendido es que la situación actual de las regiones a que se ha refe-

rido el señor ministro, regiones cuyas condiciones naturales, económicas y morales conozco, estén reclamando imperiosamente la organización militar que ahora se va a dar con esta gendarmería.

Sr. Ministro del Interior. — Acaba de leerse una nota, señor diputado, de uno de los territorios nacionales pidiendo la pronta sanción de este proyecto de ley.

Sr. Solari (J. A.). — ¡Pero, señor ministro! Sobre diez gobernaciones, que se escuche la voz de una sociedad de fomento de un grupo de pobladores, ¿qué importancia puede tener para decidir un cambio total, radical, en la trayectoria seguida en materia de organización policial en esos territorios?

Sr. Guglielmelli. — Hace veinte años que se está pidiendo la gendarmería.

Sr. Solari (J. A.). — Hay cosas tan importantes o más que la gendarmería que se están reclamando desde hace más de medio siglo en el país.

Sr. Guglielmelli. — No hay que poner obstáculos, cuando se trata de salvar esos inconvenientes.

Sr. Solari (J. A.). — No pongo obstáculos. Estoy en una tarea de colaboración. Lo que quiero es que no se agite un fantasma inexistente para justificar la sanción de una ley que será, a juicio de muchos, tan urgente como se quiera, pero que no se ajusta a las reales necesidades de las gobernaciones.

Sr. Ministro de Guerra. — Si me permite el señor diputado...

Voy a dar lectura de una nota de pobladores del territorio de Chaco que ha tenido entradas ayer en el Ministerio de Guerra, y dice así: «La situación de esta laboriosa y progresista parte del territorio nacional de Chaco, frente a cuatreros, ladrones y asaltantes de todo género que ejercen sus delictuosas actividades con la audacia y frecuencia que les permite una impunidad que la falta de policía y la selva acogedora les asegura, es cada día más alarmante y, en el campo, angustiosa. Asaltos y robos se suceden en poblado y en despoblado, que realizan no sólo delincuentes de acción individual sino también temibles bandas organizadas, bandidos de profesión, venidos de las grandes ciudades a quienes no impulsa la necesidad, que operan sin temor a nada y han llevado su audacia hasta el asalto de trenes y que llevan el drama y el deshonor a las familias y que ellos saben que la policía no puede perseguirlos con éxito porque la zona es muy grande, la selva muy extensa y el contingente policial muy

escaso y muy mal montado. Hubo un tiempo —cuando el Chaco civilizado no era tan grande como hoy, ni su población tan numerosa— en que la dotación policial cubría sus servicios, aparte del que prestaba la gendarmería montada, de tanta eficacia en la campaña, que en mala hora para el territorio fué disuelta, sin sustituirla con un equivalente de fuerzas militarizadas que garantizaran, en el campo especialmente, vidas y haciendas». Firman esta nota las fuerzas vivas de este territorio. Hay varias hojas con firmas autenticadas.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Firman esa nota las fuerzas vivas de Chaco?

Sr. Ministro de Guerra. — Sí, señor diputado.

Sr. Solari (J. A.). — Anoche, al hacer yo algunas excepciones, establecí precisamente la de Chaco. Dije que las autoridades de ese territorio, en mi opinión, no se ajustaban estrictamente, en algunos aspectos, sobre todo en este de la vigilancia policial, al cumplimiento de sus deberes.

No quiero, sobre este aspecto, insistir demasiado, pero es evidente que sobre un territorio que tiene 250.000 habitantes, o casi 300.000, esas fuerzas vivas representarán intereses de determinadas localidades o de determinados centros, pero no la de los nueve territorios restantes. Hay, además, un antecedente que he recordado anoche y que ahora he de reiterar con la presencia del señor ministro. Según la opinión del jefe de policía de Chaco, el índice de criminalidad de ese territorio no ha superado los porcientos registrados en la Capital Federal. La delincuencia habría declinado. Desde luego, entre la opinión de las fuerzas vivas, que a veces son muy fuertes y muy vivas, y la del jefe de policía, yo, desde luego, he de atenerme a la información oficial, si bien sé, como lo ha recordado el señor ministro del Interior esta tarde, que el señor gobernador días después reclamó el aumento de las plazas policiales.

Para terminar mi exposición, he de hacer una sola consideración.

El señor diputado por Buenos Aires, al referirse a un párrafo de mi exposición, manifestó que había omitido un antecedente a la Cámara con respecto a la existencia de automóviles, camiones y motocicletas, lo que no hubiera podido ocultar, por otra parte, si ése hubiera sido mi propósito, porque en la página 223, de la orden del día que discutimos, figura ese antecedente, del que todos los diputados debemos estar informados.

Sostengo que, a pesar de estos 23 camiones, 11 automóviles y 30 motocicletas, la organización de esta gendarmería es pesada. No es ágil, lo rápida, lo movable que sería de desear, pues no podrá movilizarse con estos elementos, en el mejor de los casos, más de un diez por ciento del efectivo. De manera que sigue siendo, a pesar de la existencia de esos camiones, automóviles y motocicletas, una gendarmería que hay que agilizar.

El señor ministro —y en alguna cosa tenían mos que coincidir—, ha dicho que harían falta aviones. Yo creía que teníamos varias bases aéreas o, por lo menos, las necesarias para seguir una trayectoria que nos permitiera vincularnos rápidamente con algunas zonas alejadas del país. Pero si esta ley ha de permitir establecer lo que no existe o existe a medias, que son los servicios de aviones que no sólo han de permitir la persecución de los delincuentes sino la vinculación de las poblaciones, habría que celebrarlo como un progreso relativo de la sanción de esta ley; y repito que levanto mi voz desinteresada y libre de toda preocupación política, en parte, como reivindicación del millón de conciudadanos laboriosos y dignos que se albergan en los territorios argentinos y que no merecen, desde luego, ciertos calificativos, y que tampoco son protagonistas de novelas policiales que a veces se tejen caprichosamente para justificar sanciones como ésta. Todo esto sea dicho con el respeto que merecen sus autores y desde luego, haciendo honor a la palabra de los señores ministros (*¡Muy bien!*)

Sr. Ministro del Interior. — Que no han dicho ninguna de las cosas a que se ha referido el señor diputado en la última parte de su exposición.

Sr. Solari (J. A.). — Los señores ministros, no.

Sr. Castex. — Pido la palabra.

Tal vez hubiera correspondido que usara de la palabra en la discusión en particular, porque me hubiera referido especialmente al artículo 1º; pero aprovecho la oportunidad para dar los motivos de mi firma en el despacho, aunque los ha dado abundantemente mi compañero de representación, el doctor Susan.

He entendido que este proyecto obedece a una necesidad sentida y no solamente sentida en la época actual. Ya se ha dicho que tuvo iniciación en 1921 por un proyecto del Poder Ejecutivo que ejercía el doctor Irigoyen; fué reproducido en 1923, por un proyecto del gobierno del doctor Alvear, y reiterado en 1926 y 1928.

Sr. Solari (J. A.). — Hay iniciativas parcia-

les que arrancan del año 1877. Eso es historia, y las cosas han variado mucho en los territorios.

Sr. Castex. — Pero no es historia despreciable ni desechable, porque esos gobiernos y los diputados que han traído las iniciativas han debido tener —especialmente los poderes ejecutivos— elementos de juicio que les han hecho pensar en la necesidad de la creación de un cuerpo de vigilancia en los territorios. No se concibe de otra manera la unidad de pensamiento en esta materia de gobiernos de tan diversa generación popular.

No me asombra la estadística mencionada hace un momento, que establece la disminución de la criminalidad, porque lo que puede registrar la estadística es la criminalidad procesada, que ha podido ser llevada a la jurisdicción judicial; pero debe haber otra que escapa a la justicia, precisamente por la carencia de elementos policiales. El delito existe pero no puede la estadística registrarlo, porque muchas veces queda oculto por los inconvenientes de orden natural, incluso lo falto de denuncia, por razones de distancia en otras.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Me permite el señor diputado una interrupción que será hecha con el mejor espíritu de cordialidad parlamentaria?

Sr. Castex. — Con mucho gusto.

Sr. Solari (J. A.). — En enero de 1938, el jefe de policía de Resistencia, que es el señor Ginés A. Lubary —tengo entendido que es un apellido correntino— decía lo siguiente: «Las estadísticas demuestran que en la última década, el tanto por mil de los delitos, con relación al número de habitantes y con relación al área sembrada, tanto en cifras absolutas como relativas, no ha superado nunca los porcentajes registrados en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Desde el año 1928, hasta la fecha, en la gobernación de Chaco la tasa más elevada que se registra es la del año 1933, con el 7,25 por mil de delitos en proporción a la población, para ir desde entonces señalando un ininterrompido descenso hasta el año actual, que da el 3,64 por mil. Con respecto a los autores de delitos, en 1933, se registró el 73,8 % de aprehendidos; en 1934, el 74,92; en 1935, el 87,61; en 1936, el 80,16 y en 1937 el 80,65 por ciento.

Sr. Anastasi. — Seguramente la proporción de empleados de policía de Buenos Aires es mayor que en el Chaco.

Sr. Castex. — Yo no he permitido esta interrupción, pero la ha permitido el señor diputado Solari.

Sr. Anastasi. — Muchas gracias.

Sr. Castex. — El argumento esgrimido por el señor diputado por la Capital, no destruye la afirmación que acabo de hacer, de que debe haber delitos que no están registrados en las estadísticas por la carencia de elementos policiales que puedan llevar a los delincuentes ante la justicia.

Sr. Anastasi. — Pero los delitos se constatan, aunque no se pueda procesar a los delincuentes.

Sr. Castex. — Es posible que no se constate siquiera el delito por las enormes distancias o porque no se puede hacer siquiera la denuncia.

Por otra parte, señor diputado...

Sr. Solari (J. A.). — ¿Me permite?...

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia no lo permite porque el señor diputado ha hablado ya varias veces.

Sr. Solari (J. A.). — Es la última, señor presidente.

El jefe de policía de Chaco dice que el cuatrismo acusa una disminución notable. Tal vez haya un poco de optimismo de su parte.

Sr. Castex. — Bien, señor presidente; parto de la base de que los diversos ejecutivos que han traído esta iniciativa al Congreso de la Nación deben haber tenido los suficientes elementos de juicio para creer en la necesidad de esta institución. Es por eso, señor presidente, que en su aspecto general he firmado el despacho que está a la consideración de la Cámara. No escapa a mi criterio que el proyecto de ley adolece de serias deficiencias. El señor diputado Solana ha apuntado esta tarde, a mi juicio, el punto más vulnerable que ofrece el proyecto de ley, y cabe también decir que en las reuniones de la comisión a que asistía el señor ministro de Guerra, el diputado que habla hizo la observación que ha formulado el señor diputado Solana. Me refiero a la aplicación del Código de Justicia Militar cuando los componentes de la gendarmería no tienen estado militar. Pero yo me anticipo, porque sé que al considerar en particular este proyecto se han de proponer algunas modificaciones al artículo 8º, que establece la jurisdicción del Código de Justicia Militar. Yo me anticipo para decir que me parece más oportuna la modificación del artículo 1º, para que entonces no ofrezca dudas la compatibilidad de la aplicación del Código de Justicia Militar a la institución a crearse.

Yo entiendo, señor presidente, y lo hemos entendido los miembros radicales de la comisión, que hemos sostenido la militarización en

el seno de la misma de esta entidad que, como va a operar en divisiones y subdivisiones de pequeño número, completamente aisladas en vastos territorios, es necesario que sus elementos componentes tengan un freno que evite las extralimitaciones a que siempre se siente tentado el poder policial. Si no existe el freno, que en esta oportunidad sería el Código de Justicia Militar, estos hombres que por razones de distancia serán dueños de vidas y haciendas, no lo encontrarán en el Código Penal y tal vez se convertirían en el primer azote de los pobladores de los territorios. Por eso es que hemos creído que debía aplicarse el Código de Justicia Militar. Para ello, es necesario que tengan estado militar. Esa cuestión la planteamos ante la comisión en presencia del señor ministro de Guerra, quien hizo algunas objeciones y, entre otras, la de la necesidad de que en el plazo más breve se dictara esta ley, para que pudiera comenzarse la organización de la institución a crearse.

Se objeta en esta Cámara la militarización de esta institución porque se le atribuye sólo fines policiales. El señor ministro de Guerra al comenzar su exposición esta tarde, aunque sea levemente, ha insinuado que tiene dos objetivos, que tiene también un objetivo militar, porque sería una unidad suplementaria del ejército que tendría a su cargo la preparación de elementos para funciones, si se quiere secundarias del ejército, pero siempre funciones necesarias para el mismo ejército.

Si es que va a tener aunque sea en una leve parte funciones militares, lógico es que haya militares retirados en sus diversos comandos y que para que puedan llenar esa función suplementaria estén regidos también por el Código de Justicia Militar. Por eso es que creo más atinado que proponer modificaciones al artículo 8º, propiciar una modificación del artículo 1º y darle a esta institución, vuelvo a repetirlo, estado militar. Entonces sería inobjetable desde todo punto de vista la aplicación del Código de Justicia Militar y la institución llenaría sus dos objetivos: el militar y el policial.

Sr. Cooke. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Castex. — Sí, señor diputado.

Sr. Cooke. — Habría que modificar, entonces, la finalidad a cumplir por esta gendarmería. No podría ser un cuerpo militar el que realizara la acción que le está asignada.

Sr. Castex. — Note el señor diputado que será un cuerpo militar de composición especial, ya que no tendrá la del resto de nuestro ejér-

cito, y que desempeñará otra función más, aparte de la militar que será secundaria, la de carácter policial. Hoy está ejerciendo esa función policial en Formosa, como se ha repetido en esta Cámara, un cuerpo de nuestro ejército compuesto en la misma forma que el resto de las unidades. Bien podría, entonces, desempeñar una función policial esta institución.

Sr. Solari (J. A.). — En aquel cuerpo hay voluntarios y conscriptos.

Sr. Castex. — Entonces ¿por qué no podría ejercer funciones policiales esta institución que tendría una composición especial y también funciones militares?

Sr. Cooke. — Por las mismas razones que ha dado hace un rato el señor ministro de Guerra; porque no es misión específica del ejército realizar funciones de policía.

Sr. Castex. — Efectivamente, pero entiendo que el señor ministro se ha referido al ejército tal cual está constituido en la actualidad. Si se crea una unidad del ejército con una composición peculiar y se le asigna en su creación la doble función militar y policial, podría desempeñarla porque sería un cuerpo en cierta manera militar con una función policial especialmente asignada.

Sr. Cooke. — Habría dos clases de ejército.

Sr. Anastasi. — Es cierto, como en el caso de los carabineros de Chile.

Sr. Susan. — Y como en Italia, en que ese cuerpo tiene 50.000 hombres.

Sr. Cooke. — Habría un ejército de la Constitución y otro de esta ley.

Sr. Castex. — Por otra parte, la Constitución no establece cuál es la formación del ejército.

Sr. Anastasi. — Tendríamos ejército y milicia.

Sr. Castex. — Tendríamos un ejército permanente con su composición actual y un cuerpo como el de los carabineros de Chile, con estado militar que ejercería funciones militares y policiales.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Por qué no mejoramos la policía? Este es el problema.

Sr. Sammartino. — Prácticamente sería un reclutamiento de tropas y, en tal caso, el proyecto tendría que iniciarse en la Cámara de Diputados. Correspondería, entonces, plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Castex. — Esa es otra cuestión que yo no he planteado.

Termino haciendo notar que más beneficiosa para la institución a crearse y para los intereses de los pobladores de los territorios sería

la modificación del artículo 1º, dándole estado militar a este organismo, antes que modificar el artículo 8º, para eliminar la aplicación del Código de Justicia Militar y dejar a los componentes de esta entidad con los brazos un poco más sueltos para operar en aquellos lejanos territorios.

Sr. Anastasi. — En tal caso habría que modificar la estructura del proyecto.

Sr. Castex. — Desde luego, habría que suprimir todas las disposiciones que estuvieran en contraposición con el artículo 1º, en cuanto acordara estado militar.

Sr. Anastasi. — Sería el caso de preguntar a la comisión si ella tiene estadísticas de una delincuencia tan excepcional que requiera la adopción de esa medida; si las estadísticas le dicen eso o, simplemente, se trata de impresiones como las que hemos oído de labios del señor diputado Videla Dorna.

Sr. Castex. — La pregunta habría que dirigirla más bien a los miembros del Poder Ejecutivo que han propiciado esta iniciativa.

Sr. Anastasi. — Pero la comisión tiene que controlar lo solicitado por el Poder Ejecutivo; no basta que diga que el Poder Ejecutivo lo ha pedido.

Sr. Cooke. — Pido la palabra.

A esta altura del debate no voy a pronunciar un extenso discurso, sobre todo tratándose de la discusión en general. Por otra parte, el orden de trabajo que había adoptado la Honorable Cámara me hizo suponer que en el día de hoy no llegaría a tratarse este proyecto y por eso no traje los elementos concordados y ordenados para una exposición relativa a mi discrepancia con dos o tres puntos fundamentales del mismo.

El concepto que tengo acerca de la responsabilidad de mi palabra no me permitiría entrar a una discusión de esta naturaleza haciendo citas y referencia a legislaciones extranjeras, no teniendo sobre mi banca los elementos que fundamentaran mis asertos.

Desde luego, se trata de un asunto que no tiene aspecto político. Ha sido propiciado desde épocas lejanas por todos los gobiernos y reclamado por la prensa del país desde hace muchos años. Está en la conciencia de todos que en una forma o en otra es necesaria esta acción represiva, que según los diputados socialistas puede ser ejercida por la policía y que según la mayoría de las opiniones predominantes, conviene sea ejercida por una gendarmería especial.

Soy partidario de esta ley, que va a contar con mi voto y con el de muchos compañeros

de mi sector, pero decididamente contrario a dos o tres de sus disposiciones que involucran errores de derecho público y de derecho constitucional, que de no ser reparados en esta oportunidad, es posible que algún día tengamos que lamentarlo.

Hace algunos días, en la confidencia amable de los pasillos de la Cámara, un distinguido hombre político, con una larga experiencia pública y parlamentaria, y con toda la autoridad moral que le da una vida consagrada a la defensa del interés público, me decía: «El día que se sancione esta ley, ustedes, los radicales, no ganarán una elección más». Yo no soy tan pesimista. Yo no le temo, en cuanto a la falta de garantías electorales, al ejército de mi país, y, por consiguiente, no le puedo temer a esta gendarmería que en su aspecto fundamental será militarizada.

Y voy a traer, al pasar, un pequeño recuerdo de mi actuación política. En vísperas de las elecciones ya famosas del 3 de noviembre, el alto organismo de mi partido en la provincia de Buenos Aires, resolvió que su presidente y su secretario —que lo era yo a la sazón— se entrevistaran con el presidente de la República para solicitarle que los comicios fueran controlados por oficiales del ejército de la Nación. La Unión Cívica Radical tenía confianza en que el pundonor de los militares pondría a las urnas al abrigo de cualquier atentado. Desgraciadamente, en aquella oportunidad el presidente de la República no coincidió con nuestro pensamiento y nos expresó, reiteradamente, su deseo de mantener al ejército ajeno a la política, no obstante que en la única oportunidad en que había intervenido en esas funciones, como ocurrió en el caso de las elecciones de Tucumán, fué precisamente en la que tuvo lugar la elección más correcta realizada desde esa época hasta estos últimos tiempos.

Ese antecedente y los que he conocido en mi vida política, de que cuando ha estado de por medio la custodia de los derechos o de las urnas confiada al honor de los militares, la ley no ha sido falseada ni los ciudadanos han sido burlados, me hace pensar que esta nueva gendarmería, en vez de ser una guardia pretoriana o un instrumento de opresión, tiene que ser un instrumento de libertad y un elemento de garantía para todos los derechos.

Podría extenderme en múltiples consideraciones y me atrevería a decir que quizá me sería fácil la réplica de muchas de las razones que se han expuesto en este recinto para combatir la sanción de este proyecto, porque en

realidad, sin esfuerzo de imaginación, se puede llegar a la conclusión, y se puede demostrar con los mismos argumentos, que precisamente es esta gendarmería la que puede contribuir a disipar y a evitar gran parte de las deficiencias que existen en los territorios nacionales y gran parte de los males que los agobian.

Recuerdo en este instante, que hace unos días, un hombre civil que acababa de pasar unos días en ese suntuoso establecimiento que se ha levantado en Llao-Llao para los ricos de este país, con espíritu de argentino y de curioso siguió viaje hasta Bariloche, donde tiene asiento una agrupación militar, y se refirió a su jefe —cuyo nombre lamento no recordar para hacerle cumplida justicia en este recinto—, haciéndome relación de la acción de sano y puro nacionalismo que está realizando. Con admiración me refería que este digno militar invitaba a los pobladores de los alrededores a visitar el cuartel; que a los niños de las escuelas, algunas lejanas, los hacía traer en los camiones del ejército, los reconfortaba con un refrigerio, les repartía escarapelas argentinas que muchos de ellos no habían visto en su vida y les daba también alguna lección elemental de historia argentina para evitar lo que había constatado: que ciudadanos argentinos, radicados hacía muchos años en esa zona, ignoraban que existió un soldado prócer que se llamó San Martín, ignoraban quién era el presidente de la República e ignoraban todo lo que es elemental que conozca un ciudadano de país civilizado.

Sr. Solana. — Eso le demuestra, señor diputado, que no es indispensable la gendarmería para esas funciones.

Sr. Cooke. — Eso me demuestra que cuando el ejército, que específicamente no tiene la misión de realizar obra de educación y cultura...

Sr. Solana. — ¿Cómo no va a tenerla?

Sr. Cooke. — Ha podido tenerla en la época en que la Patagonia era el desierto, pero no la puede tener, a mi juicio, en la época actual. Eso me demuestra que es necesaria esa fuerza que se propone crear asignándole funciones que son coadyuvantes con las que realizan diversas reparticiones del Estado.

Sr. Solari (J. A.). — ¿El señor diputado se refirió a Bariloche? Allí hay dos batallones: el de zapadores y el de comunicaciones y sanidad, que son dos cuerpos militares de carácter diríamos técnico, muy eficientes, que al realizar su tarea la extienden al medio popular en que actúan.

Sr. Ministro de Guerra. — Es la misión que está desarrollando la fuerza del ejército en

toda la Patagonia. Lo que ha señalado el señor diputado por Buenos Aires se realiza en todas las guarniciones: en Esquel, en Junín de los Andes, Las Lajas...

Sr. Solari (J. A.). — El señor ministro, que anoche no escuchó la exposición que hice, si se toma la molestia de leerla, encontrará una referencia nuestra en el sentido de señalar como un paso digno de ser aplaudido, la instalación de la 6ª División del Ejército.

Sr. Ministro de Guerra. — La he leído.

Sr. Solari (J. A.). — Y expresaba nuestro deseo —por lo menos mi deseo personal— de que la sede del comando salga de la ciudad de Bahía Blanca tan pronto como sea posible, para adentrarse más en la vida de los territorios.

Sr. Cooke. — Refiero lo que conozco. Soy un viajero al que le gusta el confort y la comodidad, y confieso que no he recorrido los territorios de mi país. Conozco de oídas lo que ocurre en algunas partes y he traído una referencia seria.

Sr. Solari (J. A.). — No lo he puesto en duda.

Sr. Cooke. — Puede ser que el señor diputado Solari, como los demás colegas de su sector, cuyas andanzas por los territorios nacionales son bien conocidas y han dado lugar a eficaces e inteligentes iniciativas presentadas a esta Cámara, tenga un mayor conocimiento que el que pueda tener yo de la realidad de lo que ocurre en esos territorios. Pero en la época en que vivimos, con la lectura fácil al alcance de todos, cualquier ciudadano bien inspirado puede formarse una impresión real de lo que ocurre en cualquier zona de su país, leyendo lo que han escrito los que se han tomado la molestia de recorrer esos territorios.

Sr. Repetto. — Reconozca nuestra labor pero no nos atribuya andanzas.

Sr. Solari (J. A.). — Giras de estudio.

Sr. Cooke. — Si le molesta la palabra al señor diputado, no tengo ningún inconveniente en reemplazarla. Puede que tenga razón; no serán andanzas; habrán sido viajes de estudio. Me cuesta muy poco complacer al señor diputado porque he tenido oportunidad de constatar la eficacia de esos viajes en cuantas iniciativas han presentado con motivo de los mismos, y, sobre todo, por la responsabilidad y documentación con que los señores diputados socialistas traen los asuntos a este recinto, entre otros, el reciente de la yerba, en el cual el señor diputado Repetto nos demostró que sus viajes de estudio, o sus andanzas, como las calificué, no habían sido en vano.

El señor diputado Solari nos decía anoche, citándonos un artículo de «La Vanguardia» subscripto por el doctor Bravo, que el problema de los territorios nacionales no es un problema militar. Efectivamente, comparto esa opinión aunque creo que el ejército ha sido un factor fundamental para su progreso. En el mismo sentido creo que el problema de los territorios nacionales no es solamente un problema de gendarmería, pero la gendarmería será un factor fundamental y decisivo para el mejoramiento de la vida en esos territorios, y para la realización de los propósitos, que debemos perseguir todos, de que esas extensas regiones, ricas la mayoría de ellas, se conviertan en el porvenir no sólo en emporios de riqueza, sino también de cultura y civilización.

No quiero abusar del tiempo de la Honorable Cámara porque, en realidad, las cuestiones sobre las cuales me interesa ocuparme con res-

pecto a este asunto, las puedo abordar en la discusión en particular. Deseo, así, finalizar esta breve exposición, anticipando a la Honorable Cámara desde ya que, no obstante que he de dar mi voto en favor de este proyecto en la votación en general, discrepo con respecto a tres o cuatro puntos que he de considerar en la discusión en particular.

Sr. Presidente (Kaiser). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Sr. Ruggieri. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Kaiser). — La Presidencia acaba de informarse de que no hay.

Sr. Guillot. — Entonces, corresponde levantar la sesión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Así es, señor diputado. Queda levantada la sesión.